

Crítica a la Economía Verde

Impulsos para un futuro social y ecológicamente justo

Barbara Unmüßig, Wolfgang Sachs y Thomas Fatheuer





HEINRICH BÖLL STIFTUNG
TEXTOS SOBRE ECOLOGÍA

Crítica a la Economía Verde

Impulsos para un futuro social y ecológicamente justo

Autores: Barbara Unmüßig, Wolfgang Sachs y Thomas Fatheuer

Editado por la Fundación Heinrich Böll

La autora y los autores

Barbara Unmüßig desde 2002 es la presidenta de la Fundación Heinrich Böll. Sus áreas de responsabilidad son globalización, política climática, política nacional e internacional de género, promoción de democracia y prevención de crisis. En 1991 y 1992 fue directora de la oficina de proyectos UNCED de la Federación Alemana para la Protección del Medioambiente (Deutscher Naturschutzring, DNR) y de la Unión alemana para la Protección de Medioambiente y Naturaleza (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND) donde estaba a cargo de la preparación de la cumbre mundial de Río de Janeiro de 1992.

Dr. Thomas Fatheuer estudió Ciencias Sociales y Filología Clásica en Münster. De 2002 a 2010 vivió y trabajó en Brasil, donde, entre otras actividades, fue el director de la oficina de representación en Brasil de la Fundación Heinrich Böll en Río de Janeiro. Desde 2011 vive en Berlín, donde trabaja como asesor y autor independiente.

Dr. Wolfgang Sachs estudió Teología, Sociología e Historia. Durante muchos años trabajó como científico en el Instituto de Clima, Medio Ambiente y Energía en Wuppertal, y fue profesor invitado en el Schumacher College en Inglaterra, así como profesor honorario en la Universidad de Kassel. Es miembro del Club de Roma. Es autor de numerosas publicaciones en Alemania y en el extranjero sobre el medio ambiente, la globalización y los nuevos modelos de prosperidad.

Esta publicación es, como todas las publicaciones de la Fundación Heinrich Böll, de DISTRIBUCIÓN GRATUITA y NO puede ser vendida o usada con fines comerciales.



Esta publicación está sujeta a las condiciones de una licencia de Creative Commons. Se puede bajar una versión electrónica. Está autorizada la reproducción y difusión pública de la obra con las siguientes condiciones: Se debe nombrar explícitamente a los autores/propietarios de los derechos en la forma establecida por ellos, siempre y cuando ello no cause la impresión de que se está remunerando la utilización de la obra. Queda prohibida la utilización comercial de esta obra. Queda prohibida la modificación de esta obra.

Crítica a la economía verde
Impulsos para un futuro social y ecológicamente justo
Barbara Unmüßig, Thomas Fatheuer, Wolfgang Sachs

Editado por la Fundación Heinrich Böll

Fotografía de la portada: Landov MCT 5003040, dpa (la imagen muestra una fábrica de etanol en Brasil)
ISBN 978-3-86928-082-0 (del original en alemán)

Dirección: Fundación Heinrich Böll, José Alvarado 12-B, Col. Roma Sur, C. P. 06760, Deleg. Cuahtémoc, México, D. F.
Tel. 52 64 15 14
www.mx.boell.org

ÍNDICE

Prólogo	4
Brasil – Un país emergente entre la riqueza y la depredación	6
El ocaso del neoliberalismo y la precaria consolidación	6
El milagro latinoamericano	7
Boom de recursos: la base del éxito	7
Siempre de nuevo: la Amazonia	9
Desde Río a Río	12
Acuerdos estancados	12
Transformaciones en las constelaciones de intereses y de poder	13
La malograda fe en el desarrollo	14
Evasión de la responsabilidad	15
El precio ecológico de la globalización	16
El sueño de revertir la tendencia	17
Economía Verde ¿La nueva promesa?	19
La economía verde según PNUMA	20
Monetarización de la naturaleza - ¿la escapatoria a la crisis de los ecosistemas?	21
Crecimiento verde según OCDE	23
Bioeconomía - el ascenso de los amos de la biomasa	24
Tecnología y eficiencia como fórmula mágica	26
Un tema ausente: los derechos humanos	29
El perfil de una economía moderada	31
La economía de suficiencia	31
Los social commons como factor económico	34
El bienestar en la diversidad	38
Bibliografía	42

PRÓLOGO

La primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 1992, alguna vez fue considerada como una piedra angular de la política ambiental. Pero no condujo a un verdadero cambio en las tendencias, a favor de un futuro social y ecológicamente sostenible. Desde entonces todas las tendencias globales ecológicas importantes han sido para empeorar, no para mejorar. La política y la economía siguen, hasta el día de hoy, tomando sus decisiones sin que en ellas influyan mayormente el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la escasez de los recursos. Estos ensayos describen las razones por las cuales tampoco en la próxima conferencia sobre desarrollo sostenible –de nueva cuenta en Río de Janeiro– se deben esperar cambios en la orientación y la forma de pensar de las élites políticas y económicas.

El cambio climático, la escasez de recursos, la seguridad alimentaria, la pérdida de ecosistemas y de la diversidad biológica: todos ellos requieren de acciones rápidas y objetivos prioritarios. Pero con la cumbre de Río+20 se ponen de manifiesto dilemas masivos. La gran crisis económica mundial grita por más crecimiento. Para superar la pobreza también se piensa en categorías clásicas de crecimiento y desarrollo. El cambio climático y la creciente escasez de recursos, no obstante, demandan límites, moderación y reducción globales. Sería necesaria una nueva “gran transformación”, un nuevo contrato social entre todas las naciones que acepte los límites planetarios y aspire a un desarrollo orientado a los derechos humanos. Pero en lugar de ello se dan respuestas macroeconómicas tradicionales, que por sí mismas no pueden resolver los problemas.

Parecería como si veinte años después de la primera Cumbre de la Tierra siguiera siendo un sueño que los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo reunidos en Río de Janeiro tomaran en serio los límites planetarios y, finalmente, dieran los pasos necesarios para lograr un mundo más justo, con bajas emisiones de carbono y eficiente en recursos. Con estos ensayos queremos dilucidar lo que no se dirá en Río... pero que es necesario decir.

Los límites planetarios requieren de pasos valientes y radicales para una transformación global. La economía verde pasa por ser la nueva promesa de “el futuro que queremos”, como reza el lema de Río+20. Se le negociará por primera vez a nivel internacional en la conferencia de Río+20. Sin embargo, lo que es o debe ser continúa siendo objeto de una acalorada polémica. A las y los lectores les espera un análisis de los conceptos centrales de la economía verde, que siempre colocan a la economía como núcleo de todos los debates sobre la viabilidad de futuro. Es cierto que sólo salvaremos al planeta con la economía, y no contra ella. ¿Pero es que de verdad la economía constituye el centro de todas las soluciones? Queremos estimular la reflexión crítica de los conceptos en cuestión y señalamos alternativas. La tecnología y la

eficiencia desempeñan un papel importante en todos los conceptos de la economía verde. Pero para qué y para quién, nos preguntamos. No todo lo que es “verde” y eficiente es también ecológicamente sostenible y socialmente justo. Necesitamos eficiencia, necesitamos cuidar los recursos, pero también necesitamos una política de lo “menos” si es que los recursos y la atmósfera han de alcanzar para todas las personas sobre la Tierra y si es que ha de ser posible una vida digna y sin carencias. La eficiencia, la consistencia, la suficiencia y los derechos humanos son los elementos de una economía verde, de un bienestar con moderación.

Nosotros, la autora y los autores de estos ensayos, participamos activamente a nivel político, periodístico y científico ya en la primera Cumbre de Río de Janeiro. La Cumbre de la Tierra de ese entonces marcó nuestro pensamiento y nuestras acciones, como los de tantas otras personas. Somos realistas respecto al estado ecológico en el que se encuentra el planeta y a las constelaciones de poder y de intereses en el mundo: no anuncian ninguna gran transformación. Pero al mismo tiempo somos optimistas porque creemos en la voluntad y la fuerza de los seres humanos, que interceden por su bienestar y su libertad: por su Buen Vivir.

Berlín, mayo de 2012.

Barbara Unmüßig
Presidenta de la Fundación Heinrich Böll

CAPÍTULO 1

Brasil – Un país emergente entre la riqueza y la depredación

Quien haya visitado Brasil por última vez en 1992, se llevará grandes sorpresas en 2012. En estos veinte años el país y el continente han experimentado profundos cambios. Precisamente Brasil encarna al efecto la dimensión global de esta evolución: el país deudor vapuleado por la crisis se ha convertido en un global player que rezuma autoestima. El eterno país del futuro finalmente parece haber encontrado su presente. Entre tanto Brasil es ya la sexta economía del mundo, acaba de rebasar a Gran Bretaña. “Por fin, potencia mundial”, fue el título en el Financial Times Deutschland, y éste resumió la nueva autopercepción de Brasil. Sin embargo, no todos los viejos espíritus han sido exorcizados definitivamente, como los debates en torno a las megapresas y la destrucción de la selva tropical. Todavía se sostienen furiosos debates en torno a la destrucción de la selva tropical amazónica, y la pregunta por el costo ecológico del progreso es tan actual como nunca. Una mirada sobre los últimos veinte años muestra una interesante falta de transparencia.

El ocaso del neoliberalismo y la precaria consolidación

En el año de 1992 un presidente de nombre Fernando Collor recibió a gobernantes de todo el mundo en Río. A finales de ese mismo año, fue destituido de su cargo por corrupción. Después de los últimos años de la dictadura militar y de una larga transición, Collor fue el primer presidente de Brasil electo de manera directa. Su agenda política y los debates estaban dominados por dos temas: el combate a la inflación y las reformas neoliberales. En 1992 fracasó el primer plan de estabilización del gobierno (Plano Collor) y la inflación llegó a un inimaginable 1131%. El país trastabillaba hacia una nueva recesión. Esto fue tanto más amargo, dado que los años 1980 se consideraron de manera general como la década perdida de América Latina. En 1992 el PIB per cápita en Brasil alcanzó únicamente el 90% del valor que había tenido en 1980, en el país vecino Argentina el retroceso fue todavía más drástico. También era deprimente lo que sucedía en el panorama político. En Perú gobernaba Fujimori, en Argentina, Carlos Menem. El continente se caracterizaba por sus personajes autoritarios y populistas, así como por las guerras civiles en Perú y Colombia. Ignorado en gran parte por la opinión pública mundial, un joven oficial venezolano estaba en la cárcel en 1992, después de un fallido golpe de Estado: Hugo Chávez.

Al mismo tiempo los tigres asiáticos se hacían notar. En Corea del Sur y Taiwán se gestaban historias de éxito de un desarrollo que recuperaba terreno. América Latina, por el contrario, parecía ser el continente perdido por excelencia. En este contexto, la agenda neoliberal no podía aspirar a lograr éxitos a corto, ni tampoco a señalar

perspectivas a largo plazo. Sin embargo, sí influyó de manera duradera al continente: en los años noventa se privatizaron importantes empresas estatales en Brasil (y en la mayoría de los países de América Latina). Las dimensiones de la privatización varían de país en país, pero al final de este proceso el sector de las telecomunicaciones ha sido privatizado en su totalidad y en el sector bancario y minero el número de las empresas estatales se ha reducido considerablemente. No obstante, en casi todos los países esta ola de liberalización se topa con vehementes corrientes en contra: en todas partes las reformas neoliberales acaban por ser chapucería. Así, en Brasil los dos bancos más grandes del país y el consorcio petrolero Petrobras siguen en manos del Estado.

El milagro latinoamericano

2012: El contraste con el año de 1992 no podría ser mayor. Después de una difícil fase de consolidación que se da durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), bajo el gobierno de Lula da Silva se inicia un duradero auge económico. Programas de redistribución (Bolsa Familia) y un aumento sistemático del salario mínimo dan como resultado una impresionantes reducción de la pobreza. Esta historia de éxito se repite a lo largo de todo el subcontinente. La tasa de pobreza en la población de América del Sur desciende en 17% entre 1990 y 2010, la de extrema pobreza incluso de 22.6% a 12.3%.

Los viejos temas casi han sido olvidados. Brasil ha pasado de ser un gran país deudor a un país que en su balanza de créditos presenta un superávit neto. La inflación está bajo control y la economía crece de manera constante, en 2010 se alcanzó un valor récord con un crecimiento de 7.5%. El milagro económico ha contribuido a una estabilidad política poco común en América Latina: Lula no sólo fue reelecto, sino que incluso logró que en 2010 Dilma Rousseff, su candidata, fuera elegida como su sucesora. También en otros países del subcontinente muchos presidentes han sido confirmados en sus cargos mediante la reelección.

Resulta notable que esta increíble estabilización y recuperación de América Latina haya coincidido con un desarrollo político que es considerado de manera general como un giro a la izquierda. Gobiernos “progresivos” están en el poder de casi todos los países del subcontinente sudamericano. En especial Hugo Chávez y Evo Morales se perciben a nivel mundial como los protagonistas de un ostensible alejamiento de los conceptos neoliberales; Lula, por el contrario, más bien representa la variante moderada de este giro a la izquierda. No obstante, también Brasil se concibe a sí mismo como protagonista de una agenda post-neoliberal. El Estado es el motor de una activa política de desarrollo, se suspenden las privatizaciones y los bancos públicos se convierten en un importante instrumento de planeación. Un Estado activo + crecimiento económico + redistribución: así se podría resumir el modelo del éxito brasileño.

Boom de recursos: la base del éxito

Pero la base del auge en América Latina es una economía depredadora: el crecimiento depende en gran parte de un nuevo boom de materias primas; el petróleo, el gas natural, la minería y la exportación de materias primas y productos agrarios han lle-

nado las arcas estatales en América Latina. Este fenómeno es conocido como “neo-extractivismo”. La dependencia del continente de las exportaciones de materias primas es un viejo tema. Pero el “neo” también es importante, puesto que los gobiernos de izquierda han utilizado los ingresos de este nuevo boom de materias primas para hacer política social. Basta con una sola cifra para ilustrar las dimensiones del *boom*: entre 2004 y 2008 las exportaciones del Mercosur más Chile y Bolivia provenientes de la minería aumentaron de 20 mil a 58 mil millones de dólares.

En el pasado la izquierda sudamericana criticaba acremente a las economías de enclave extraccionistas, mientras que hoy las defiende por considerarlas un componente indispensable para el desarrollo y el combate contra la pobreza. Más aún, afirma que un Estado que se rija por ellas es más eficiente. E interviene en un discurso modernizador que celebra el éxito empresarial y comercial así como la utilización de innovaciones científicas y técnicas, a la vez que pone en primer plano el beneficio que esto significa para toda la sociedad, sobre todo en relación con su posibilidad de acceder al consumo (véase Gudynas 2011).

De esta manera, la legitimidad de los gobiernos de izquierda en Sudamérica se basa en una combinación de extractivismo y redistribución, misma que es percibida como un modelo de éxito tanto por los gobernantes como por grandes partes de la población. No es de extrañarse, entonces, que precisamente muchos gobiernos en América Latina y las fuerzas sociales que representan alberguen una profunda desconfianza hacia una economía verde, puesto que barruntan el peligro de que sus éxitos se vean reducidos por las restricciones verdes. Si bien es cierto que en Brasil la extracción de petróleo también desempeña un papel importante, el factor principal del auge basado en las exportaciones lo constituye el sector agrícola. La soya, el complejo azucarero (azúcar y etanol), la carne y el mineral de hierro son los productos de exportación más importantes de Brasil. El porcentaje de materias primas o de productos poco procesados (aluminio, celulosa) en las exportaciones ha aumentado claramente en los últimos años: de 2005 a 2011 el porcentaje de productos industrializados en las exportaciones se redujo de 80% a 59%, en tanto que en el mismo lapso la exportación de minerales y productos agrícolas aumentó a 41%.

Incluso en los círculos gobernantes esta tendencia en las exportaciones, conocida como “reprimarización”, es vista con preocupación. Pero, por lo general, más bien se le considera como una “ventana de oportunidad” que hay que aprovechar, también para posibilitar las mejoras estructurales (inversiones en infraestructura y educación). Así pues, la gran potencia Brasil es, como lo dice su himno nacional: “Gigante por la propia naturaleza”. La dependencia de la naturaleza del modelo de desarrollo brasileño es reforzada por el sector energético. Aproximadamente 80% de la energía eléctrica procede de la energía hidráulica. Y ningún otro país en el mundo ha invertido de manera tan consecuente y exitosa en el desarrollo de los agrocombustibles como Brasil.

Ahora el gobierno brasileño está tratando de presentar este modelo energético, basado en fuentes de energía bajas en emisiones y en materias primas renovables, como su versión de una economía verde. Pero con esto nos encontramos frente a un conflicto totalmente diferente al que existía todavía en 1992. La concentración de la política ambiental internacional en la emisión de CO₂, en el marco de las negociaciones sobre el cambio climático, ha apoyado opciones de desarrollo que han generado conflictos socioecológicos totalmente diferentes, y que evidentemente están relacio-

nados con las cuestiones del uso de la tierra. De esta manera, el cultivo más intensivo de caña de azúcar (para obtener etanol) y el monocultivo de soya ha provocado que el ganado haya sido desplazado hacia la Amazonia y también la destrucción de ecosistemas. Así es como los viejos fantasmas han regresado con ropajes nuevos.

Siempre de nuevo: la Amazonia

Brasil podría presentarse a la opinión pública mundial como el país modelo de una economía verde, sino fuera por la Amazonia. En el año de 1992 la deforestación de la selva tropical más grande del mundo se encontraba en el foco del interés mundial por Brasil: los sucesos de los años anteriores se habían encargado de ello. En diciembre de 1988 el asesinato de Chico Mendes conmocionó al mundo. El dirigente del movimiento de los recolectores de caucho se había convertido en un icono global de la lucha contra la destrucción de la selva tropical gracias a sus acciones de bloqueo contra la deforestación. En 1989 la protesta contra una megapresa en el río Xingú capturó la atención mundial. Gracias a ello los pueblos indígenas brasileños fueron tomados en cuenta como actores internacionales, y lograron mucho: por lo menos de manera provisional se les dio carpetazo a los planes de construcción de la presa, el Banco Mundial retiró su consentimiento para otorgar un crédito de más de 500 millones de dólares para el sector energético y los ambiciosos planes del gobierno de construir cuarenta presas en el Amazonas para el año 2010 quedaron por lo pronto en el olvido.

La Amazonia se había convertido en un símbolo de desarrollo fallido a costa del medio ambiente. Para reaccionar a este problema, el presidente Collor nombró ministro de medio ambiente al internacionalmente reconocido ecologista José Lutzenberger. En una entrevista con el semanario alemán *Der Spiegel*, en marzo de 1990, Lutzenberger dijo que Collor quería “retirar a Brasil del banquillo de los acusados, en el que, en su opinión, hoy se encuentra con justa razón”. Y más aún: “Lo que está sucediendo en la Amazonia es una guerra, un saqueo. Una coalición de latifundistas y consorcios multinacionales están depredando los recursos del país a costa de la gente que vive ahí y de la naturaleza. Se están violando los derechos humanos de los indígenas y los recolectores de caucho.” Un balance muy amargo para venir de un representante del gobierno.

Lutzenberger no soportó seguir en su puesto ni siquiera para estar presente en la Conferencia de Río en 1992.

Sin embargo, sí se han dado algunos grandes cambios desde entonces. Entre tanto la política ambiental no es ya de manera prioritaria una estrategia de mercadotecnia, sino una parte establecida y profesionalizada del sistema político y jurídico de Brasil. También Lula hizo de primera instancia un intento con una carismática activista ambiental como ministra: Marina Silva, compañera de lucha de Chico Mendes, fue el primer nombramiento que anunció tras haber sido electo presidente en 2002. También esto mostró la preocupación por la imagen internacional de Brasil. Marina aguantó seis años, pero después también a ella se le derramó el vaso: el ministerio del Medio Ambiente era presionado insistentemente para que no obstaculizara el camino de los grandes proyectos y el crecimiento económico. En 2010 Marina obtuvo el 20% de los votos en las elecciones presidenciales como candidata del Partido Verde, una clara señal de que la cuestión ecológica se había convertido en un importante tema de conflicto social.

Con Izabella Teixeira, Brasil ahora es representado por una nueva generación de políticos ambientales. La actual ministra tiene una formación en el ámbito ambiental y es una profesional calificada. Representa el giro de una protección ambiental heroica a una pragmática que, en sus propias palabras, ya no quiere impedir que se realicen proyectos controvertidos sino condicionarlos. En junio de 2012 querrá presentarle a la opinión pública mundial una historia de éxitos. Y, de hecho, la destrucción de la selva tropical en la Amazonia se ha reducido notoriamente en los últimos años. Ya en Copenhague, Brasil anunció su intención de reducir la deforestación en 80% en la Amazonia para el año 2020.

Y, sin embargo, un éxito auténtico parece imposible de alcanzar. Antes de que inicie Río+20, Brasil está dividido por una nueva ley forestal. La ley amnistiaría la tala ilegal llevada a cabo en el pasado y flexibilizaría las regulaciones existentes. ONGs y movimientos sociales brasileños consideran que esta ley, que cuenta con una considerable mayoría parlamentaria, alentaría la deforestación, y han iniciado una campaña internacional contra su aprobación o, en su caso, para que la presidente la vete.

Y hay otro tema delicado que se hará presente en Río en junio de 2012. Pues fue precisamente el gobierno de Lula el que rompió el tabú acerca de la construcción de megapresas en la Amazonia. Dos grandes presas fueron instaladas en el río Madeira, y se han retomado los fracasados planes de 1989 para Xingú. En plena Amazonia están comenzando ahora los trabajos de construcción de la tercera presa más grande del mundo: Belo Monte, que se ha convertido en un conflicto a nivel mundial. Pero el gobierno brasileño insiste en que el futuro de la obtención de energía de Brasil está en la Amazonia. Mientras que en las inmediaciones de los centros industriales se ha agotado casi totalmente el potencial para construir centrales hidroeléctricas, el gobierno ve un gran futuro en la Amazonia: según el actual plan de diez años de política energética, en la región deberán construirse 28 centrales hidroeléctricas hasta el año 2017. Según la organización International Rivers, están planeadas incluso más de 60 presas en la Amazonia brasileña. Aun cuando la explotación de este potencial depende de muchos factores, queda claro que la Amazonia se ha convertido en una región clave para las perspectivas de crecimiento de Brasil. Ahora la Amazonia es el “El Dorado hidroeléctrico” del país (Raul do Vale).

El valor central que esta región tiene para el actual modelo de desarrollo del gobierno se muestra en las prioridades del “Programa para la Aceleración del Crecimiento” (PAC), el programa central de inversiones del gobierno. Hasta 2020 se debe haber invertido en la región la increíble suma de 212 mil millones de reales (aproximadamente 90 mil millones de euros). La energía, el transporte y la minería son las prioridades de inversión que deben convertir a la Amazonia en un motor del crecimiento (Folha de São Paulo). Cómo armonizar estas perspectivas con la conservación de la selva tropical... ésta es una pregunta abierta que tiene dividida a la opinión pública en Brasil.

Así pues, los viejos fantasmas siguen vivos, aunque han cambiado de rostro. El debate ya no es economía “verde” contra economía “café”; ahora la misma economía verde se ha convertido en escenario de acaloradas disputas. El gobierno brasileño gusta de calificar a los agrocombustibles y la energía hidroeléctrica como su contribución a una economía verde, libre de bióxido de carbono. Sin embargo, precisamente estos factores son criticados fuertemente por las y los ambientalistas y por los movimientos sociales debido a sus consecuencias eco-sociales. El sector agrario ya no es representado por la vieja guardia de los latifundistas, sino que se ha desarrolla-

do para transformarse en un sector económico sumamente moderno y productivo. Así pues, la cadena brasileña de mataderos JBS Friboi se ha convertido, en sus propias palabras, en el “procesador de proteína animal” más grande del mundo. Este agrobusiness goza de una gran influencia política y se ha establecido como un importante sostén para el gobierno, a la vez que ha aprendido a adoptar el discurso ambiental. En conferencias ambientales, hoy se presentan con gran despliegue y un fuerte cabildeo actores como el sector brasileño azucarero y del etanol. Y el ex ministro de Agricultura Roberto Rodrigues, hoy un elocuente defensor del agrobusiness, es seguramente el personaje de la vida pública que propaga con mayor celo en Brasil las oportunidades que ofrece la economía verde: Brasil podría liderar el proyecto global de la economía verde, sobre la base de la expansión de la agroenergía y la energía hidroeléctrica.

Pero tales defensores de una economía verde agravan las dudas de las ONGs y los movimientos sociales: entre el escepticismo de la vieja izquierda por un lado y dudosos actores como portavoces por el otro, casi no queda espacio para adoptar a la economía verde como un punto de partida positivo. Y aquí se manifiesta una diferencia fundamental con Río 1992. Veinte años después de que la vieja oposición entre el medio ambiente y el desarrollo se hubiera suavizado, por lo menos a nivel discursivo, las ideas “verdes” han perdido la inocencia y se han convertido ellas mismas en el escenario en el que se enfrentan conceptos antagónicos. El mundo es hoy todavía menos transparente que hace veinte años, esto lo muestra claramente el ejemplo de Brasil.

CAPÍTULO 2

Desde Río a Río

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1992 ha sido idealizada por algunos como un suceso mítico. Esto es ignorar la historia. El movimiento internacional ecológico y por el desarrollo reunido en la cumbre de Río en 1992 no celebró los resultados alcanzados. Se evidenció muy pronto que Río 92 no fue el hito histórico de una política global que propiciara la ecología y la justicia social. No se produjeron los esperados dividendos de la paz. Aún más, por primera vez después del término del conflicto Este-Oeste, la Conferencia de Río de 1992 puso de manifiesto en la escena mundial las grandes diferencias de intereses y tensiones entre el Norte y el Sur, dentro del mundo de la OCDE (países industrializados) y del G77+ (Club de los países emergentes y en vías de desarrollo). Se hicieron patentes los innumerables intereses particulares económicos y nacionales. Las contradicciones conceptuales y los muchos compromisos determinaron también en ese entonces la agenda y las decisiones.

Acuerdos estancados

El Convenio Marco sobre el Cambio Climático firmado en Río debía contener en ese entonces metas concretas de reducción de las emisiones de CO₂, lo que fracasó por el veto de los Estados Unidos. Las actuales pertinaces negociaciones multilaterales sobre la protección del clima recuerdan en forma fatal la idea planteada en aquella oportunidad de firmar tal convenio incluso sin los EE.UU. El Convenio por la protección y conservación de la diversidad biológica si bien obliga a proteger los ecosistemas, las especies y la diversidad genética, no ha sido ratificado por los EE.UU. y continúa destruyéndose la biodiversidad.

No ha sido posible detener la concentración del uso del genoma en las manos de algunos pocos consorcios (por prospección, patentes, etc.). El Convenio sobre la lucha contra la desertificación, en su origen una concesión a los países en vías de desarrollo, ha perdido casi toda eficacia e importancia.

Aún así, todos estos convenios de 1992 generaron un importante marco jurídico internacional de carácter vinculante, y por primera vez se comenzaron a tratar las crisis ecológicas y climáticas transnacionales en un contexto de negociación multilateral.

La Agenda 21, un compendio de 300 páginas, es el instrumento central de la primera Conferencia de Río. La Agenda 21 describe campos concretos de acción e indica vías para erradicar la pobreza y las inequidades con un desarrollo sustentable, a la par de garantizar la protección de las bases ecológicas de subsistencia, y fue el motor de muchas iniciativas que serían implementadas en las comunas: las agendas locales.

Los ciudadanos comenzaron a exigir que se les posibilitara participar en el diseño de políticas comunales ecológicas y más justas. Hasta hoy subsisten algunas de las alianzas entre ciudades y comunas, incluso transnacionales.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Millennium Development Goals-MDG) del año 2000 desgraciadamente no se vincularon a este plan de acción del año 1992 y significan un importante retroceso frente a lo alcanzado en Río, en lo que concierne a los objetivos ecológicos. A pesar de las considerables diferencias regionales, no han cambiado las tendencias fundamentales respecto de los desequilibrios sociales y ecológicos y la pobreza en el planeta. El quintil más bajo de la población mundial recibe sólo el 2% del ingreso mundial y el 25% de la población mundial sigue siendo responsable de tres cuartos de las emisiones de CO₂, a las que contribuyen cada vez más los países emergentes. La situación de vida de un tercio de la población mundial, que vive directamente de los recursos naturales, no ha mejorado, sino empeorado durante los últimos 20 años por el cambio climático, la erosión del suelo, la escasez de agua, la deforestación de los bosques, desaparición de especies, así como por la concentración de tierras.

La Declaración de Río de los Jefes de Estado y de Gobierno de 1992 sólo estableció importantes orientaciones de política medioambiental para la acción económica, como los principios de precaución y de contaminador-pagador. Sin embargo, éstas no fueron implementadas consecuentemente pues, de otro modo, en los últimos 20 años se habría registrado una menor destrucción ecológica y contaminación de la biósfera y atmósfera.

Los mayores cambios que se han producido durante los últimos 20 años se refieren a la geografía económica del mundo. Si bien en Río '92 las constelaciones de intereses y conflictos eran más complejas que lo que algunos querían aceptar, la conferencia todavía estaba marcada por el conflicto Norte-Sur de varias décadas. El poder de negociación de los países industrializados evidenciaba pocas fracturas. Su objetivo era integrar mejor los crecientes problemas medioambientales transnacionales en el contexto de las NU. Los países en vías de desarrollo pusieron como condición que el “desarrollo” fuera la segunda palabra clave junto a medio ambiente en Río '92. La “Declaración de Río” es más bien una declaración por el desarrollo que una declaración por el medioambiente. Se consagró en ella nuevamente el “derecho al desarrollo” y se desplegó gran habilidad diplomática para que no existiera ninguna oración que pudiera interpretarse como defensa de una contención del desarrollo. Este compromiso resultó muy conveniente para los países industrializados y los países en vías de desarrollo, pues permitía continuar las actividades corrientes haciendo caso omiso de la crisis medioambiental. Cada informe que aborda el estado global del medio ambiente lamenta que se mantenga este Business as usual y plantea que ello es justamente lo que se debe cambiar.

Transformaciones en las constelaciones de intereses y de poder

La categoría política Norte y Sur sirve hoy menos que en 1992. La globalización económica ha inutilizado esta diferenciación, aún cuando sigue siendo planteada en el póker político de las negociaciones internacionales, según sea la situación de intereses, sobre todo de los países emergentes.

Brasil, China, India son un ejemplo del enorme esfuerzo que han hecho los países emergentes por acortar las diferencias económicas. Durante la Cumbre de Río de

1992 China aún no aparecía como un actor importante o se ocultaba en el grupo de los 77+. Sin embargo, la economía china ha crecido desde los años ochenta a un promedio anual de un 10%. Al principio creció casi exclusivamente con un desarrollo basado en los combustibles fósiles y en las materias primas, orientándose hacia los sistemas de producción y de consumo del Norte. Esto último se repitió en Brasil, y también, aunque en bastante menor medida, en India. Tan sólo por eso, las constelaciones de intereses y de poder ya no son las mismas que en 1992. La creciente importancia económica de los países emergentes ha repercutido en los procesos de decisión y, entretanto, también en las correlaciones de fuerzas en los foros políticos multilaterales e instituciones internacionales, como el FMI o el Banco Mundial. Este incremento de poder político no ha significado de ninguna forma que se hayan producido impactos favorables hacia un desarrollo más compatible con la protección del clima y los recursos y socialmente aceptable. Los gobiernos de los países emergentes hacen todo lo posible para no dejarse imponer límites en el consumo de recursos naturales y en las emisiones de cualquier tipo. Además, en cifras absolutas, la mayoría de los antiguos países industrializados nunca redujo sus emisiones o su consumo de recursos naturales. A veinte años de la Conferencia de Río no son precisamente un modelo y atraviesan la mayor crisis económica y financiera desde la Segunda Guerra Mundial.

La malograda fe en el desarrollo

En una mirada retrospectiva a la Cumbre de 1992 podemos constatar un error funesto, pero históricamente inevitable: no fue cuestionado el concepto de “desarrollo como crecimiento”. La misma conferencia llevaba el título programático “Medioambiente y Desarrollo” y la Declaración de Río proclamó finalmente el concepto de “desarrollo sustentable”.

Aunque sea importante nombrar las positivas interacciones entre medioambiente y desarrollo, no están exentas de contradicciones. Con la ambivalencia del concepto de desarrollo se oculta que el “desarrollo” no armoniza automáticamente con el “medioambiente”. Desarrollo significa, por un lado, hacer proliferar los rascacielos, cultivar especies de alto rendimiento y aumentar el parque automotriz, es decir, desarrollarse para ponerse a la par de los países industrializados, y, por el otro, excavar pozos de agua, instalar hospitales y facilitar el transporte a los mercados regionales. El concepto de desarrollo sustentable ha dejado abierto su alcance: ¿“desarrollo como crecimiento” o “desarrollo como justicia social”? ¿Quién tomará parte de él, quién se beneficiará de ello? ¿Cómo será diseñada la política de distribución a nivel global, regional y local?

El concepto de desarrollo sustentable no responde a tales interrogantes y es de un vacío monumental. Si englobamos conceptualmente ambas perspectivas de desarrollo sólo puede generar confusión o encubrimiento. El discurso de la reconciliación entre economía y ecología es un resultado de ello. Muchas de las carencias de la tan renombrada cumbre mundial provienen de esta ambivalencia en el concepto de desarrollo. La sustentabilidad se transformó muy pronto en una palabra de moda sobre todo en Alemania, siendo una palabra hueca aplicable a todo y cualquier cosa: pensiones sustentables, presupuestos sustentables, etc. Un concepto cualquiera que ha sido desprovisto de su original poder emancipatorio e innovador. Se ha perdido

la intención original de diseñar en conjunto las dimensiones ecológicas, sociales, económicas y culturales, integrando sus interrelaciones y apuntando a la viabilidad futura de las sociedades, ya sea en el Norte o en el Sur, en el Este o el Oeste, y no ha sido traducida en acción política. Además, con “desarrollo como crecimiento” se esbozaba que el Sur de este mundo debía imitar al Norte; aún más, que los países pobres sólo tendrían perspectivas de éxito en tanto forzaran la transición desde una sociedad agraria a una moderna por la vía de una industrialización sustentada en los recursos fósiles.

Todos los acuerdos de Río '92 son ambivalentes: pregonan, por un lado, un cambio ecológico y subrayan, por el otro, la necesidad del crecimiento económico, el libre comercio, la privatización y desregulación. En el transcurso de dos años se resolvió esta ambivalencia: Marruecos desbancó a Río. Los mismos gobiernos que en Río se habían vanagloriado como los salvadores de la tierra, se develaron en Marruecos como sus vendedores. Con la fundación de la Organización Mundial del Comercio (WTO) en enero de 1995 se hicieron vinculantes los compromisos de libre comercio, cuyas repercusiones derivaron en una enajenación aún más acelerada del patrimonio natural a nivel mundial. Todo lo que pudiera haberse contabilizado como ganancia después de Río, fue arrasado con igual rapidez por la ola de la globalización. Así se explica la paradoja de Río: Río sirvió para la retórica, Marruecos se concretó.

Evasión de la responsabilidad

En Río 1992 se consagró por primera vez en un documento internacional el principio de la responsabilidad compartida, pero diferenciada, y la capacidad para superar las crisis sociales y ecológicas. En éste, todos los gobiernos asumieron responsabilidad y prometieron justicia social, tanto entre las naciones, como al interior de las sociedades y entre las generaciones.

Este principio de Río no exceptuó a ningún gobierno de actuar consecuentemente y estableció correctamente la responsabilidad histórica del Norte por las crisis globales. Los gobiernos aceptaron coherentemente hacerse cargo de las principales reformas estructurales necesarias respecto de las emisiones y consumo de recursos naturales y asumir un papel de vanguardia. También aceptaron ampliar en términos generales la transferencia de tecnologías y la ayuda al desarrollo conforme al principio de apoyo solidario. Los gobiernos del Sur fueron llamados igualmente a combatir la pobreza protegiendo el medioambiente. Este magnífico consenso multilateral quedó atascado en medio de la dinámica económica neoliberal.

Los países industrializados quebrantaron muchas veces el compromiso de Río y no contuvieron su modelo expansivo. Los antiguos países industrializados nunca han prescindido de su uso excesivo del patrimonio natural global, aún habiendo incrementado su eficiencia. Nunca le dieron cabida a los países emergentes y en vías de desarrollo.

En ningún otro aspecto fracasó tan drásticamente el principio de la responsabilidad compartida, del reparto de la carga y la promesa de los principales contaminadores, como en la protección del clima. Las emisiones de CO₂ de los países industrializados han seguido aumentando en forma continua, en lugar de disminuir drásticamente como es necesario.

El Norte ha sobregirado tanto su cuenta medioambiental que la lucha por repartirse lo que “queda” puede adquirir expresiones amenazantes. Además, las transferen-

cias financieras ofrecidas por el Norte están muy por debajo de lo comprometido repetidamente (para el desarrollo y la protección del clima). El Norte ha aportado hasta ahora demasiado poco como para asumir la vanguardia en el consumo de recursos naturales y la producción de emisiones.

Por su parte, los países en vías de desarrollo comprendieron equivocadamente su responsabilidad compartida, pero diferenciada, como una opción de copiar los modelos de consumo y producción del Norte y de proveerlo de productos masivos y de recursos y materias primas de todo tipo.

En lugar de tomar en serio la principal lección de Río '92, es decir, que no es posible globalizar el antiguo modelo occidental de consumo y producción, ha sucedido justamente lo contrario. En la actualidad se explotan masivamente las materias primas y tierras, y todavía una magnitud gigantesca de energías fósiles. Además, con el auge de los países emergentes, los antiguos países industrializados enfrentan una poderosa competencia por los recursos cada vez más escasos. La carrera por las materias primas partió hace tiempo y se ha incrementado claramente la competencia por las nuevas materias primas críticas como el litio, coltán o el grupo de metales de las tierras raras, que son también los “materiales” de una nueva matriz energética sustentable y fundamentales para muchas tecnologías del futuro en las comunicaciones, el transporte y el sector militar. Por ello, la política de recursos naturales y materias primas dejó de ser un tema parcelado y se encuentra entre las prioridades de la agenda política de los países industrializados y emergentes. Asegurar el abastecimiento de materias primas para la producción industrial se ha transformado en un tema fundamental en la política y entre las empresas industriales y las instituciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio.

El precio ecológico de la globalización

El precio ecológico de la globalización es horrendo. En los últimos años se ha alcanzado el mayor incremento de las emisiones de CO₂ en el mundo y no sólo en países emergentes como China. Conforme a los datos de la Agencia Internacional de Energía, las emisiones llegaron a un valor punta de 30,6 gigatoneladas durante el año 2010 en todo el mundo. Las negociaciones multilaterales sobre el clima no han cambiado nada en ello y han llevado a un abismo evidente (“Gigaton Gap”) de hasta 10 gigatoneladas, que en realidad deberían ser reducidas si queremos alcanzar en parte las metas exigidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), es decir, una reducción de por lo menos 25 a 40% en los países industrializados hasta el año 2020 (comparado con las cifras de 1990).

La demanda global por materias primas energéticas como no energéticas ha generado masivos aumentos en los precios, lo que hace económicamente lucrativas las inversiones en explotaciones cada vez más riesgosas, caras y nocivas, como por ejemplo las perforaciones de alta mar y, sobre todo, la obtención de las arenas bituminosas y el gas de esquisto. Canadá es el mayor productor y exportador mundial de petróleo obtenido de arenas bituminosas. En la provincia de Alberta se han generado paisajes devastados en una superficie equivalente a la de Gran Bretaña. Los químicos y residuos contaminan el medioambiente local, aumenta la tasa de cáncer entre la población local y la producción devora cantidades estratosféricas de agua y energía. Con ello la protección del clima es una farsa.

Sin embargo, no sólo en Canadá existe esta forma especialmente contaminante y no convencional de obtener petróleo. En Nigeria, Madagascar y la República del Congo también se realizan prospecciones, sondeos de prueba y algunos proyectos piloto para convertir las arenas bituminosas. La mala gestión gubernamental, las altas tasas de corrupción y los ecosistemas frágiles hacen que los impactos potenciales y efectivos de estos proyectos sean desastrosos.

A diferencia, por ejemplo, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de la desertificación, en el sector de los recursos naturales no existe ningún régimen global o acuerdo que se pudiera tomar como referencia y donde se pudieran negociar regulaciones vinculantes. Resulta sorprendente que un sector tan primordial presente falencias tan flagrantes de regulación. En la carrera internacional por recursos cada vez más escasos, son los gobiernos de los países industrializados y emergentes y los consorcios los que fijan sus propios límites y, en consecuencia, están poco interesados en las regulaciones internacionales.

La replicación de los modelos de producción y civilización del Norte se refleja también en los hábitos alimenticios en el mundo. La demanda por alimentos ha sufrido una transformación fundamental en los últimos años. Debido a los mayores ingresos, la clase media global consume más carne y trigo (pan blanco en lugar de arroz) en distintas regiones. Los países como Alemania, que se han especializado en una producción animal intensiva, importan enormes cantidades de forraje. La industria ganadera alemana monopoliza superficies gigantescas para cultivar pastos en diferentes países del mundo, tierras que se restan allí para asegurar los alimentos de la población local y regional. Según un estudio de WWF, la UE ha explotado durante las últimas décadas más de 30 millones de hectáreas de superficie agrícola fuera de sus propias fronteras, es decir, ha importado virtualmente tales superficies. En el período entre 2008 y 2010, Alemania - disponiendo de una superficie agrícola útil propia de aproximadamente 17 millones de hectáreas - participó en el comercio virtual de tierras explotando casi 7 millones de hectáreas (WWF 2011). Con la apropiación virtual de casi 7 millones de hectáreas explota fuera de la UE el equivalente a casi un 40% de su propia superficie. La explotación virtual de tierras para producir soya, el forraje más importante en la producción industrial ganadera, es de aproximadamente dos millones de hectáreas (WWF 2011:38) y se sigue talando la selva tropical para el forraje ganadero y la producción de soya.

El sueño de revertir la tendencia

A veinte años de Río enfrentamos una realidad donde las crisis financiera, climática y alimentaria se agudizan recíprocamente y millones de personas experimentan cada día que lo prometido por el modelo de producción y consumo no alcanza para todos y que, también por razones ecológicas, seguirán siendo excluidos en el futuro. La política y los mercados han generado estas crisis que sacuden a la humanidad desde principios del siglo XXI - también por eso, Río 92 no sirve como referencia nostálgica.

La nueva cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Río de Janeiro en 2012 debería avanzar hacia un cambio de tendencia, hacia una gran transformación. Sin embargo, esto seguirá siendo un sueño. Si consideramos los desafíos planetarios, los temas que ocupan la tabla de la cumbre de Río de Janeiro en junio de 2012 evaden toda responsabilidad.

El mundo necesita algo más que pasitos. Si los llamados “Objetivos del desarrollo sustentable” (Sustainable Development Goals), que se pretenden poner en marcha en Río+20, se orientan efectivamente por los datos duros del conocimiento científico y fijan los límites pertinentes para la explotación de la naturaleza, los recursos naturales y la atmósfera, entonces se habrá justificado el esfuerzo de la cumbre.

Sin embargo, quien reviva el concepto de “desarrollo sustentable”, como lo hacen muchos gobierno del Sur y ONGs, si bien busca traspasar el objetivo de la dimensión social y aspectos de la justicia global y doméstica, no puede olvidar que ya no es posible deshacer la amplitud interpretativa del concepto ni su empleo arbitrario y heterogéneo –desarrollo como crecimiento, crecimiento sustentable. En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil no han logrado precisar el concepto y definirlo como “Desarrollo de la justicia social”. Un concepto que fue emancipatorio y crítico del sistema en los años ochenta fue absorbido por la política real y la economía, así como por las instituciones y doctrinas dominantes, llenándolo con los contenidos que les complacen y, con suerte, alguna que otra posibilidad de reforma. Debemos recordar esto cuando se pretenda enfrentar “desarrollo sustentable” y “economía verde”, el nuevo lema del proceso Río+20.

CAPÍTULO 3

Economía Verde – ¿La nueva promesa?

Desde la cumbre de Río de 1992 el mundo ha vivido una serie de crisis financieras y económicas: en Asia (1997/1998), en Argentina (1998/2001), en marzo de 2000, cuando explotó la burbuja de la Nueva economía y, finalmente, en septiembre de 2008, cuando, con la quiebra de Lehmann Brothers, comenzó la mayor crisis económica y financiera desde la Segunda Guerra Mundial. Con la tremenda crisis de la deuda pública en la que están sumidos muchos países europeos, la inestabilidad de los mercados financieros alcanzó un nuevo pico. Paquetes de ayuda, blindajes y créditos preferenciales del erario público por cantidades vertiginosas de miles de millones buscan salvar a los grandes bancos y ahora también a algunos Estados de la quiebra. La desregulación de los mercados financieros permitió a los actores de los mercados financieros obtener ganancias exorbitantes con nuevos productos financieros que se escapaban, y siguen escapándose, a cualquier control y supervisión. Sin embargo, las condiciones en los mercados financieros y las diversas crisis ecológicas y sociales han producido un renacimiento de la crítica al capitalismo y al crecimiento. Crece el clamor por un nuevo paradigma económico y la exigencia de nuevos modelos de bienestar y otros estilos de vida han dejado de ser sólo temas de nichos sociales o de círculos académicos. Es evidente que aumenta la crítica fundamental al modelo de producción y consumo de las sociedades industrializadas, y nuevamente está en boga la búsqueda de alternativas.

A estas discusiones más fundamentales se ha sumado el debate sobre la economía verde. Promovida hasta hace poco básicamente por ambientalistas y partidos verdes, ahora es asumida como concepto por la UE, la OCDE, algunas organizaciones de las NU, por Think Tanks, universidades y parte de la economía. El punto de partida de todas las reflexiones sobre la economía verde es el amenazante cambio climático y la escasez de recursos (*Peak Oil, Peak Water, Peak Land*). En base de inversiones masivas en la eficiencia de los recursos y energías renovables -y en lo posible limitando el aumento de la temperatura global en dos grados- la decarbonización de la economía mundial ha sido fijada como objetivo por todos los protagonistas de la economía verde. Para todos ellos ya no es una opción el “*business as usual*”, una afirmación que se repite en las innumerables publicaciones y estudios acerca de la economía verde.

Sin embargo, estas coincidencias positivas se diferencian muy pronto, lo que se evidencia en los diversos términos que circulan y provocan una confusión conceptual. El Programa de las NU para el Medio Ambiente, PNUMA, se refiere a economía verde (*Green Economy*), mientras que la OCDE y el Banco Mundial hablan algunas veces de crecimiento ecológico y otras veces de crecimiento verde, como también circula el término de “enverdecimiento de la economía”. Finalmente, el “*Green New Deal*”, incorporado al debate el año 2008 en el contexto de la crisis económica mun-

dial entre otros por el PNUMA para impulsar paquetes coyunturales “más verdes”, si bien ha perdido su aureola, sigue estando en la discusión, sobre todo por parte de los verdes alemanes y europeos.

Además, se han cifrado grandes esperanzas en la bioeconomía, que debe abrir el camino desde una economía basada en el petróleo hacia una basada en la biología. Las estrategias bioeconómicas son impulsadas actualmente por el gobierno alemán y la administración de Obama en los EE.UU. y coinciden en diversos puntos con los objetivos de la economía verde, pero deben diferenciarse conceptualmente, mientras que las propuestas de PNUMA y la OCDE se comprenden explícitamente como contribuciones a Río+20. Allí se buscará también aprobar un “*Green Economy Roadmap*” que impulse a la acción. El “desarrollo sustentable”, la palabra clave de Río 1992, podría por lo tanto ser desplazado en Río 2012 por la “economía verde”.

Tras todos estos conceptos se esconden diferentes apreciaciones acerca de cuánto crecimiento económico y consumo de recursos naturales puede tolerar aún el planeta y cuánto de ello precisa para reducir la pobreza. Además, existen distintas nociones sobre a quién debe beneficiar realmente la economía verde. ¿A la creciente clase media global? El McKinsey Global Institute señala que en los próximos años se sumarán tres mil millones de consumidores de clase media. Esta perspectiva resalta el temor frente al agotamiento anticipado de importantes recursos minerales y naturales, a lo que, no obstante, no se responde proponiendo un cambio del patrón de consumo y de los estilos de vida, es decir, ningún “desarme” en el consumo de recursos. La solución planteada es más bien incrementar la productividad y la eficiencia mediante las innovaciones tecnológicas, tanto como mejorar la disponibilidad de recursos.

La Iniciativa Economía Verde de PNUMA en cambio propone explícitamente superar la pobreza de más de dos mil millones de personas con la economía verde. Pero igual surgen algunas preguntas: ¿A quién debe beneficiar la economía verde? ¿A todas las personas? ¿Cómo nos mantenemos con ella dentro de los límites ecológicos? Con ello surgen también las preguntas acerca del cómo. ¿Por cuáles caminos? ¿Con qué instrumentos y medidas?

La economía verde según PNUMA

El PNUMA se ha perfilado como un actor destacado en la elaboración del concepto de economía verde -el informe “*Towards a Green Economy*” se extiende sobre casi 600 páginas. El PNUMA define la economía verde como una economía que conduce a un mayor bienestar para la humanidad y a una mayor justicia social, en cuanto que ayuda a reducir o administrar en forma sustentable los riesgos ecológicos y la escasez de diversos recursos. El informe constata que todos los problemas globales tienen un origen común: una errada asignación del capital. Durante las últimas dos décadas la mayor parte del capital se ha invertido en propiedades, en energías fósiles y en acciones financieras, incluyendo los derivados. Comparativamente se ha invertido menos en energías renovables, eficiencia energética, transporte público, agricultura sustentable y en la protección de los ecosistemas, la biodiversidad o el agua.

Por ello, PNUMA propone inversiones dirigidas en diez sectores claves (entre ellos energía, agricultura, desarrollo urbano, agua, silvicultura, pesca, protección de los ecosistemas), que llevarían rápida y efectivamente a un desarrollo más verde y orientado a la reducción de la pobreza, y fundamenta la propuesta con impresionantes

datos y cálculos modelo. Estas inversiones deberían ser financiadas con el 2% anual del producto actual de la economía global (que equivale a cerca de 1,3 billones de dólares). El PNUMA considera que esta suma sería suficiente para dar un impulso efectivo a una economía mundial con menores emisiones de carbono y mayor eficiencia en el uso de los recursos. Con esto, no obstante, el PNUMA sigue fiel a su mandato de ser un programa, y se contenta con nichos económicos en lugar de buscar puntos de partida para modificaciones estructurales, que podrían significar, por ejemplo, una moratoria a la explotación de nuevos campos petroleros y de gas. El PNUMA exige también que las regulaciones comerciales fomenten los productos ecológicos en el mercado mundial. Sin embargo, aporta pocas ideas a la reflexión sobre cómo deberían diseñarse las regulaciones para decarbonizar globalmente la economía mundial y hacer más eficiente su uso de los recursos. Las propuestas de mayor alcance son las referidas a la agricultura ecológica y un desarrollo urbano compatible con el medioambiente. Una de las exigencias más eficaces y de alto impacto es la supresión de las subvenciones a la agricultura y el transporte, así como al petróleo y carbón, que resulten nocivas para la ecología y la sociedad. El PNUMA asigna al Estado un importante papel regulador; sin claras normas legales y un ordenamiento estatal no es posible implementar la economía verde.

Monetarización de la naturaleza - ¿la escapatoria a la crisis de los ecosistemas?

Uno de los caballitos de batalla en el debate rumbo a Río+20 es la “monetarización de la naturaleza”. Para Pablo Solon, ex embajador de Bolivia ante las NU e influyente intelectual en América Latina, la economía verde apunta en el fondo a una nueva cualidad en la mercantilización de la naturaleza. “No sólo se busca comercializar los materiales que produce la naturaleza, sino también los procesos y las funciones de la naturaleza. Así, por ejemplo, en el futuro no se venderá sólo la madera de los bosques, sino también su potencial de captura de CO₂”.

Desde hace años el PNUMA ha sido determinante en el debate sobre una nueva valoración de la naturaleza, incluidos los instrumentos del mercado aplicados a la protección de los ecosistemas. Ya sea en la protección de los bosques o de la biodiversidad en su totalidad: el PNUMA quiere proteger los ecosistemas estimando el valor de sus servicios para la humanidad y las personas que viven directamente de ellos (incluyéndolos, por ejemplo, en el cálculo del Producto Interno Bruto). Sin embargo, el PNUMA busca también dar un valor económico de mercado a los servicios de los ecosistemas e invertir permanentemente en ellos: “una economía verde reconoce el valor de la naturaleza e invierte en el capital natural”. Los servicios ambientales son, desde la perspectiva de PNUMA, un factor económico absolutamente subestimado: “Los denominados servicios de los ecosistemas consisten fundamentalmente en bienes y servicios públicos cuya invisibilidad económica ha provocado hasta ahora que se les haya subestimado, que se hayan administrado en forma incorrecta y, por consiguiente, se hayan perdido” PNUMA 2011:22). La economía verde debe realzar este “capital natural”. Es la idea ya bastante conocida que la protección de los ecosistemas y de la diversidad biológica se logra mejor cuando su uso cuesta algo. Con el comercio de emisiones o el *Clean Development Mechanism* se introdujo ya hace tiempo la mercantilización de la protección del clima, mientras que al mismo tiempo, con ex-

cepción de Europa, no se ha promovido ninguna política para reducir las emisiones.

Dado que las arcas públicas fueron vaciadas para enfrentar las crisis económicas y financieras de los últimos años, se precisa otro tipo de estímulos para que el sector privado invierta en la conservación del medioambiente. REDD (“Reducción de las Emisiones producidas por la Deforestación y la Degradación forestal”) es considerado un prometedor instrumento en la protección global de los bosques desde la conferencia sobre el clima en Bali el año 2007. Para PNUMA es una oportunidad única de convertir el uso no sustentable de los bosques (deforestación para el comercio de madera y ganadería) en un uso verde, priorizando los servicios ambientales (conservación del suelo, recursos hídricos, biodiversidad) y exigiendo un pago por ellos.

Hacer de la protección de la naturaleza una fuente de ganancias, esta perspectiva ilusiona tanto a economistas como a ambientalistas y fomenta comprensibles esperanzas: “Una clave decisiva para asegurar el futuro sería ponerle por fin valor a los servicios ecológicos y especialmente a los servicios de los ecosistemas naturales, es decir, incorporarlos en nuestro sistema de precios” (Succow 2009).

¿Pero qué significa exactamente “ponerle valor a los ecosistemas”? No toda monetarización lleva automáticamente a la comercialización de la naturaleza. Una determinación monetaria, aunque sea aproximada, es importante por ejemplo, para medir daños ambientales. ¿Qué multas deben pagar los operadores de “*Deepwater Horizon*” por los daños en el ecosistema de las aguas abisales en el Golfo de México? ¿Qué daños provoca un barco que surca un arrecife de coral? Ciertamente cabe ponderar también si son más caras las inversiones en el procesamiento de las aguas o en la protección de los acuíferos. Según TEEB (*The Economy of Ecosystems and Biodiversity*), una iniciativa dirigida por PNUMA, ponerle un precio a la naturaleza podría ayudar a los políticos y empresarios en sus decisiones y esto en un lenguaje que comprenden. Las empresas deben poder reconocer mejor los riesgos y los políticos comprender los costos invisibles y las consecuencias de largo plazo de sus acciones.

Pero lo que no consiguen los partidarios de la economización de la naturaleza es una reflexión sobre el contexto social en el que se prestan los “servicios de los ecosistemas” – es más, se podría constatar, que este concepto incluso aumenta la invisibilidad de las relaciones sociales: Porque no es la laboriosa naturaleza la que será remunerada por sus servicios, sino sus propietarios. Muchos de los últimos ecosistemas conservados se encuentran en territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales. Sus derechos tradicionales de propiedad son amenazados por nuevos instrumentos de mercado. La crítica más aguda al concepto de PNUMA destaca que los recursos naturales serán mercantilizados para hacerlos más atractivos para el sector privado y entregarlos para la explotación comercial - la puesta en valor de los llamados servicios de los ecosistemas significarían pues una nueva etapa en la privatización y comercialización de la naturaleza. En lugar de proteger conjuntamente los recursos con la población local contra los intereses comerciales, se transforma a la naturaleza en una mercancía y no pocas veces se destierra a la población local.

Aún se presta poca atención a la tendencia a transformar todo tipo de recursos naturales en bienes transables e incorporar el suelo, agua y los bosques aún más en el ciclo monetario y transar su valor mercantil a través de instrumentos y productos financieros, como los derivados, en los mercados financieros globales. En la búsqueda de nuevas oportunidades de colocar el dinero y rentabilizarlo se pretende hacer atractivos no sólo los mercados de materias primas y alimentos, sino también el suelo

y los bosques, especialmente por su capacidad de capturar CO₂. La valoración monetaria de los denominados servicios de los ecosistemas o de los costos ecológicos del cambio climático (p.ej., a través del comercio de emisiones) o de la pérdida de la biodiversidad abre todas las puertas a la financiarización del capital natural. Según el análisis de Elmar Altvater (2012) esto significaría “la compatibilización de la política climática y ambiental con la especulación financiera”.

Por lo tanto, y dado que se trata de una verdadera ola de financiarización se precisa de un debate detallado y diferenciado respecto de la “Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (*Economics of Ecosystems and Biodiversity*) impulsada ofensivamente por PNUMA – diferenciado sobre todo, porque, en la búsqueda de soluciones a la triple crisis del clima, los recursos y la pobreza, sirve de poco rechazar de frontón todos los enfoques de la economía verde y todos los instrumentos de mercado catalogándolos de “*Greenwashing*” o capitalismo verde, como se ha difundido cada vez con mayor fuerza en la antesala de la Conferencia de Río.

Crecimiento verde según OCDE

La OCDE, la organización de los países industrializados (incluido México y Corea del Sur), discute desde 2009 acerca de una estrategia de desarrollo verde que fue presentada finalmente en mayo de 2011: “Hacia un crecimiento verde”. El punto de partida de la reflexión de la OCDE es el riesgo del cambio climático y la preocupación por la drástica reducción de ciertas materias primas, así como la imparable pérdida de la biodiversidad, la sobrepesca, la escasez de agua y suelo. El informe de la OCDE (OCDE 2011a:4) señala: “Necesitamos el crecimiento verde porque los riesgos para el desarrollo van en aumento a medida que el crecimiento continúa erosionando el capital natural”. Se pretende abrir nuevas fuentes de crecimiento con el incremento de la productividad (eficiencia en el consumo de energía y en el uso de los recursos), innovaciones (nuevas formas de creación de valor para superar los problemas medioambientales) y nuevos mercados (fomentar la demanda por tecnologías, productos y servicios amigables con el medioambiente). La estrategia de un crecimiento verde debe actuar como una lupa “para observar el crecimiento” e impedir que “se superen umbrales ambientales vitales a nivel local, regional y global” (OCDE 2011a:8). Gracias a las innovaciones es posible diferir cada vez más estos umbrales y contribuir con ello a “desacoplar el crecimiento económico del agotamiento del capital natural” (OCDE 2011a:12). Por ello, las inversiones en un uso más eficiente del capital natural son consideradas como algo esencial para asegurar el abastecimiento de materias primas y recursos naturales para la economía. La internalización de los costos medioambientales se privilegia como estímulo para las innovaciones (p.ej., subir el precio del CO₂ a un nivel más alto), al igual que la eliminación de subvenciones nocivas para el medioambiente. La ampliación de las energías renovables y de las tecnologías verdes generarán millones de nuevos empleos; la OCDE estima que en el ámbito de la generación y distribución de energías renovables se podrían generar hasta 20 millones de puestos de trabajo hasta el año 2030 (OCDE 2011a:19).

Algunos elementos de esta estrategia de crecimiento verde son remarcables, especialmente el llamado a una internalización más consecuente de los costos medioambientales, o el comentario, que los instrumentos basados en el mercado “no siempre son la solución óptima”, y que “en ciertos casos las regulaciones bien concebidas [...]

pueden ser un instrumento más adecuado o también un importante complemento a los instrumentos basados en el mercado” (OCDE 2011a:11). El buen principio ordoliberal del marco regulador que genera confianza, estabilidad y previsibilidad se refleja, como era de esperar, en la estrategia de la OCDE. Si esta estrategia se incorpora, como previsto, en los informes de la OCDE por países y, además, otros estudios sectoriales aportaran mayor precisión, representaría un avance frente a la habitual “estrategia del crecimiento por sobre todo”.

Sintonizando con la estrategia de la OCDE, el McKinsey Global Institute presentó en noviembre de 2011 un documento sobre la “revolución de los recursos naturales”. Éste también se centra en la advertencia de que la creciente escasez de recursos llevará a a) un aumento progresivo de los precios, que serán además cada vez más volátiles y b) la desaparición o el repentino fallo de importantes factores de producción. La única respuesta que el documento McKinsey ofrece a esto: productividad, eficiencia, innovación e inversiones billionarias sobre todo en el “sistema de recursos”, para responder a la futura demanda de recursos. A los desafíos (“*challenges*”), es decir, altos costos de la energía y materias primas, se contraponen las diversas oportunidades (“*opportunities*”) económicas altamente atractivas para diversos sectores económicos.

Bioeconomía - el ascenso de los amos de la biomasa

La Bioeconomía es un concepto relativamente nuevo que aparece cada vez con mayor frecuencia y muchas veces entremezclado con el debate sobre la economía verde. La bioeconomía también persigue la innovación tecnológica que genere mayor eficiencia y el aprovechamiento de los recursos naturales para la alimentación, energía, productos farmacéuticos y químicos.

La “Estrategia de Investigación Nacional Bioeconomía 2030” del gobierno alemán persigue una economía de base biológica que se guíe por el ciclo de vida natural de los materiales, que armonice con la tecnología y la ecología y utilice los procesos biológicos basándose en el conocimiento, desde el nivel de los genes hasta el ecosistema. Se busca comprender mejor la complejidad de los elementos constituyentes y de la organización de los sistemas biológicos para que puedan ser mejor aprovechados técnicamente “en beneficio del hombre y el medioambiente” (Ministerio Federal de Educación e Investigación 2010). La bioeconomía persigue perfeccionarlos técnicamente y hacerlos más eficientes y más “sustentables”. Para ello es necesario considerar de igual manera los intereses económicos, ecológicos y sociales y observar las cadenas de valor en su totalidad. El objetivo es llegar desde una economía basada en el petróleo a una de base biológica, conservando y ampliando la competitividad internacional de la industria química y farmacéutica alemana, de las empresas de biotecnología y de las empresas grandes y PYMES productoras de semillas y plantas, que también operan a nivel internacional. Se ha multiplicado el fomento público a la investigación alemana en el campo de la bioeconomía para desencadenar impulsos a la innovación tecnológica.

La Casa Blanca en Washington en abril de 2012 también presentó un “Plan de la Bioeconomía nacional” (*National Bioeconomy Blueprint*) que complementa el informe del Consejo Científico Nacional de 2009, “Una nueva Biología para el siglo XXI”, y destaca los potenciales tecnológicos de la bio-innovación para el futuro de la salud y la alimentación, subrayando lo importante que es la investigación para liberar a

EE.UU. de la dependencia al petróleo y producir nuevos bienes desligados del petróleo. En el Programa Estratégico de los EE.UU. también se privilegia la investigación para asegurar la competitividad. El financiamiento de la investigación y las inversiones en tecnologías del futuro deberán ser comprometidos y movilizadas en nuevas magnitudes, entre otros, mediante cooperaciones público-privadas y un marco legal que genere un entorno favorable para el mercado (p.ej., asegurar los derechos de propiedad con patentes, etc.). Se estima que los ingresos de EE.UU. provenientes de las diversas biotecnologías (sin contar la agricultura) fueron de unos 100 mil millones de dólares en 2010. El gran crecimiento de la bioeconomía estadounidense se atribuye, entre otros, a las diversas posibilidades de las biotecnologías y de la tecnología genética, así como a la secuenciación del ADN. La biología sintética, es decir, la modificación y uso directo de microorganismos y plantas, la modificación de proteínas en organismos y el acceso a importantes informaciones biológicas y su gestión, son considerados como los campos de acción más importantes del futuro.

¿Quiénes son los amos de la biomasa del futuro? Esta es la pregunta que -en el contexto de estos desarrollos en torno a la economía verde, pero sobre todo en las ciencias biológicas y la bioeconomía- formula el ETC-Group, una ONG internacional que analiza desde hace años las estrategias comerciales de las grandes multinacionales energéticas, químicas, farmacéuticas y alimentarias. El papel que jugaron las energías fósiles en la industrialización de los últimos 200 años sería ocupado por la biología en el siglo XXI. El control de las llamadas energías verdes y de las principales plantas comestibles, con especies de alto rendimiento o semillas modificadas genéticamente, marcan las políticas comerciales de los grandes consorcios como Monsanto, Procter & Gamble, Chevron, BASF. Según ETC Group, los sectores denominados como Big Energy, Big Pharma, Big Food, Big Chemical establecen nuevas alianzas entre sí y construyen nuevas plataformas tecnológicas. El interés por cualquier forma de vida y biomasa ha aumentado dramáticamente en los últimos años, desde la A de Alga hasta la Z de zapallo. Todo es de interés para nuevos productos industriales que reduzcan la dependencia entre la química y el petróleo, lo sustituyan del todo en el futuro y aseguren el control de la producción de alimentos. Obtener el ADN sintético, esa es la esencia de la biología sintética y es considerada el mayor mercado de crecimiento del futuro.

En estas innovaciones tecnológicas, el objetivo de unas pocas, pero grandes empresas transnacionales en los EE.UU., Europa, Japón, China y otras economías asiáticas es lograr el control estratégico de completas cadenas de valor, de las informaciones genéticas y técnicas, de los procedimientos de producción y factores de producción como la energía, biomasa, agua y tierra. Si no se da un giro político, aquí se estaría gestando una alarmante concentración de poder como la que ya observamos en el sector alimentario. La mayor parte de la producción y comercialización de alimentos también es controlada por unos pocos consorcios agrícolas y la industria agrícola. La producción de fertilizantes, pesticidas y semillas convencionales y modificadas genéticamente se encuentra predominantemente en una mano - la de quienes controlan el mercado global de los alimentos.

El objetivo del poderoso lobby de la industria de las semillas, los fertilizantes y pesticidas es asegurarse el poder sobre el mercado, a la vez que influye cada vez más sobre las decisiones políticas, en todo el mundo. Por ello, el acceso a los denominados derechos de propiedad intelectual forma parte del repertorio de las negociaciones

económicas y de los innumerables acuerdos comerciales bilaterales entre los países industrializados y aquéllos en vías de desarrollo. Los pequeños agricultores y también los asalariados rurales pocas veces tienen el poder para defenderse de las condiciones impuestas por los consorcios globales. No se divisan potentes organizaciones de agricultores que intervengan a favor de los intereses de los pequeños agricultores, al igual que fuertes sindicatos que representen los intereses de los asalariados rurales.

Esta concentración del poder está ausente en la agenda política. Ni siquiera existe una conciencia sobre el problema en la política y menos en la opinión pública. No se han asumido las lecciones políticas a partir de la concentración de poder de los grandes actores de los mercados financieros y de los llamados bancos sistémicos que han sacado provecho de su “capital de extorsión” (“*Too big to fail*”). Por el contrario: en la competencia global lo principal es posicionarse rápida y estratégicamente con innovaciones bioeconómicas y verdes. Para ello, los gobiernos apoyan a los grandes consorcios posicionados internacionalmente y a las medianas empresas con estímulos y programas destinados a la investigación y el financiamiento y, además, respaldan, mediante garantías a los derechos de propiedad (desde tierras hasta patentes), este asalto de la economía privada a todo tipo de recursos y al mismísimo código de la vida.

Las innovaciones tecnológicas y la eficiencia nos mostrarán también en el futuro el camino hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos y ayudarán a dilatar los umbrales ecológicos. Sin embargo, todas las estrategias de una economía verde o de la nueva bioeconomía deben enfrentarse a los siguientes cuestionamientos: Sí a las tecnologías e innovaciones, ¿pero, para quién? ¿Quién las controla? ¿Con qué consecuencias sociales y ecológicas? ¿Son suficientes o son sólo una estrategia de dilatación frente a un pospuesto, pero inevitable cambio de paradigma hacia una “política del menos /de reducción”? Estas son las preguntas que, muy legítimamente son debatidas con creciente virulencia entre los gobiernos, actores económicos y la sociedad civil.

Porque ninguna de las estrategias de la economía verde, desde la OCDE hasta PNUMA, aborda los aspectos del poder y la distribución. Están simplemente ausentes.

En ellas, toda nueva iniciativa y programa tiene lugar al parecer en un espacio donde no existe el poder y los intereses. Tanto la OCDE como PNUMA, en forma más explícita, promueven la función del Estado como una institución que debe fijar el marco jurídico, eliminar las subvenciones nocivas para la ecología, formular estándares legales, o impulsar una política industrial ecológica y, sobre todo, una política de investigación. Pero prácticamente no se plantean como opción política la posibilidad de fijar metas drásticas para limitar el consumo de energía y la explotación de la naturaleza (los llamados Caps, protección de grandes extensiones de naturaleza, prohibición de explotar materias primas en ecosistemas frágiles como las regiones árticas y las aguas abisales). En la noción de los protagonistas de la economía verde ya no cabe fijar límites, ni como prioridad ni como requisito.

Tecnología y eficiencia como fórmula mágica

En cualquier estrategia de transformación y en todos los conceptos económicos verdes las innovaciones tecnológicas ocupan el lugar más destacado - con ellas se busca aumentar la productividad en el consumo de recursos y facilitar la substitución de re-

curso escasos. A la vez, se ocultan reales o potenciales efectos negativos de carácter social o ecológico, especialmente aquéllos de las soluciones de gran escala. No todo lo que se considera un aporte a la lucha contra el cambio climático, como la fertilización de los océanos, espejos gigantes en el espacio, energía nuclear, grandes represas, es social o ecológicamente aceptable. Lo mismo vale para la tecnología genética que supuestamente debe ayudar a superar la crisis alimentaria. Desgraciadamente no se investigan con el suficiente cuidado ni se ponderan políticamente los efectos de tales tecnologías sobre las personas y el medioambiente. Por ello, la agenda política debe considerar urgentemente evaluar las consecuencias de las tecnologías en todas las dimensiones y, considerando las interrelaciones económicas globales, ya no basta con hacerlo sólo en cada país. En este sentido, Río+20 podría impulsar una iniciativa para un sistema de evaluación de las consecuencias de tecnologías en el contexto de las NU.

La revolución de los recursos y de la eficiencia es actualmente un mantra generalizado. La mayor esperanza se ha centrado en el desacoplamiento absoluto entre el PIB y el consumo de recursos y forma parte del credo de poder superar la crisis ecológica y alimentaria con tecnologías. El desacoplamiento es imprescindible, la reducción absoluta del consumo de recursos es urgente. La pregunta es cómo lograrlo.

La primera respuesta apunta a la eficiencia – con un manejo más eficiente de la energía y los recursos. Más del 90% de todos los materiales y energías que se movilizan para producir bienes de consumo ha sido consumido antes de obtener el producto terminado – desescombros en las minas, calor de escape de las centrales eléctricas, pérdida de suelos en la agricultura mecanizada, desechos en el procesamiento de la madera o metales, cereales en la producción animal, agua en el refinamiento de metales o gastos por transporte en el abastecimiento de combustibles. Mientras menor sea el gasto de recursos, mayor es la eficiencia ecológica de una economía. Se puede lograr mucho a través de otras tecnologías, procedimientos y productos que disminuyan drásticamente el consumo de energía y materiales. Si la política interviniese apoyando tales iniciativas, por ejemplo, con regulaciones legales, eliminando las subvenciones a productos fósiles o fijando estándares de eficiencia para las viviendas, máquinas y artefactos, el potencial de toda estrategia de eficiencia sería enorme.

Sin embargo, es necesario poner atención en el efecto bumerán que aparece cuando el mejoramiento de la eficiencia hace posibles otras actividades de uso intensivo de recursos, lo que finalmente revierte el efecto de ahorro o eficiencia logrado. Al respecto existen algunos ejemplos tristemente célebres: el ahorro obtenido por una calefacción más eficiente que es anulado por el uso de mayores superficies habitables; el rendimiento de motores de autos más eficientes que es devorado nuevamente por el peso y la velocidad de los nuevos modelos; la utilidad de líneas de producción más eficientes que es contrarrestada por la expansión y complejidad de la producción. Esto concierne especialmente a las denominadas situaciones *win-win*, que prometen una ganancia ecológica con una ganancia económica: con la expectativa de mayores ganancias financieras estas situaciones llevan aparejado el efecto bumerán. Por otra parte, los más afectados por el efecto bumerán son los países emergentes, pues suelen partir con un equipamiento tecnológicamente inferior en estos aspectos.

Aún así, la revolución de la eficiencia es glorificada como la nueva fórmula mágica, haciendo caso omiso de que las nuevas investigaciones comprueban que los diferentes efectos bumerán (financieros, materiales y cuantitativos, así como psicológicos) impedirán lograr el objetivo de mantener la explotación de la naturaleza dentro de

los límites ecológicos. Hasta ahora, según un informe para la comisión parlamentaria “Crecimiento, bienestar, calidad de vida” del parlamento alemán (diciembre de 2011), “no existe casi ningún análisis macroeconómico sobre el efecto causal de la eficiencia sobre el consumo de recursos”. Y prosigue: “en la estrategia de desacoplamiento se constató sobre todo que a pesar de que el consumo de algunos recursos aumentó menos rápido que el PIB (desacoplamiento relativo), prácticamente en ninguna parte se produjo una disminución absoluta del consumo de recursos (desacoplamiento absoluto)” (Madlener y Alcott 2011). Conclusión: un manejo racional debe ir acompañado de una moderación de los objetivos; sin revolución de la suficiencia, la revolución de la eficiencia no tiene rumbo.

La segunda respuesta reza consistencia – con un cambio hacia las tecnologías compatibles con la naturaleza. En los conceptos más elaborados de una economía verde, además de la eficiencia se da gran importancia a la estrategia de la consistencia, es decir, a la compatibilidad entre industria y naturaleza. ¿Cómo se puede explotar la naturaleza sin destruirla? Las técnicas anteriores a la era de los combustibles fósiles pueden ofrecer algunas indicaciones al respecto: rotación trienal de cultivos, construcción en madera, molinos de viento, barcos a vela. Todas ellas tienen una lógica similar. El hombre debe saber adecuarse a las fuerzas de la naturaleza antes de pretender dominarla y administrarla para su propio beneficio. Sin embargo hoy, en la era post-fósil, disponemos de otro arsenal de tecnologías. La biotecnología e informática, biónica e ingeniería, pueden proceder según la misma lógica: explotar inteligentemente la naturaleza sin debilitar su capacidad de regeneración. Las energías renovables son el ejemplo más prominente de tal tipo de estrategia, la agricultura ecológica es otro. El viento, el sol, la geotermia y también los microorganismos y nutrientes, son todas fuerzas de la naturaleza, que pueden ser explotadas en beneficio del ser humano sin destruirlas. La estrategia de consistencia aventaja a la estrategia de la eficiencia en que la orientación del desarrollo tecnológico es sustentable, mientras que la estrategia de la eficiencia nos puede llevar en la dirección equivocada.

Sin embargo, si se aplica masivamente, la estrategia de la consistencia muy pronto topa con sus propios límites, ya que las energías y materiales renovables tampoco están disponibles ilimitadamente - no es posible usar una mayor superficie de tierras para bioenergía y biomasa sin afectar la producción de alimentos y la protección de la naturaleza. Sabemos desde hace tiempo que no se puede sustituir fácilmente un recurso escaso por otro. Por ejemplo, en el mundo ha disminuido en las últimas décadas

la superficie cultivable por persona desde 0,45 a menos de 0,25 hectáreas. Aún más: mientras más tecnología se integra a los ciclos de la naturaleza, mayor es el efecto de freno de sus ritmos y capacidades sobre las exageradas expectativas de rendimiento, a no ser al precio de volver a usar nuevamente fuentes de energías fósiles. Tanto la estrategia de eficiencia como la de consistencia yerran su objetivo si no se las acompaña del principio de suficiencia, bienestar con moderación en lugar de exceso desenfrenado. Sin embargo, la suficiencia está ausente en todos los conceptos de la economía verde.

Un tema ausente: los derechos humanos

En todos los escenarios de la economía verde o la bioeconomía los derechos políticos, sociales, económicos y culturales ocupan poco espacio o están directamente ausentes. Por eso es todavía más grave que las estrategias de la economía verde (con

excepción de los efectos sobre el empleo) prácticamente no incorporan la dimensión de los derechos humanos, los aspectos de la distribución y los derechos de participación democrática como elementos constituyentes de una economía verde. Se debería poder esperar del Programa sobre el Medio Ambiente de las NU un concepto de la economía verde que vincule las normas y los parámetros más importantes del derecho internacional sobre el medioambiente y los derechos humanos. ¿Quién más que la ONU podría reunir los nuevos principios, derechos y normas (principio contaminador-pagador, principio de precaución, derecho al agua y a la alimentación) consagrados en el derecho internacional? Ya no basta la simple referencia a las tres dimensiones de la sustentabilidad. La dimensión social se considera casi exclusivamente en relación con el mercado de trabajo y la potencial reducción de la pobreza, pero los derechos sociales y políticos comprenden mucho más que eso y deben ser impuestos en forma vinculante por los Estados e implementados por las empresas. La economía verde precisa una clara guía social, con políticas distributivas que beneficien a la amplia población y a los sectores más pobres en cualquier sociedad, así como a los sectores pobres y los más desposeídos en los países emergentes y en desarrollo. El control democrático y el derecho de participación de la sociedad como base de la actividad económica están ausentes. Ninguna de las estrategias, desde PNUMA hasta la OCDE, hace un aporte razonable o siquiera rudimentario a ello.

La infausta alianza entre los gobiernos de los países industrializados, en desarrollo y emergentes coincide desgraciadamente en este aspecto: los derechos humanos y los principios democráticos son postergados con demasiada frecuencia cuando se trata de defender los intereses de los grandes poderes económicos y de los estados nacionales. El Norte, por ejemplo, no tiene gran interés por las repercusiones cotidianas del cambio climático sobre los derechos humanos o las consecuencias sociales de los acuerdos comerciales bilaterales, en tanto éstas no se presenten en sus propios países. Y los países emergentes y en desarrollo (junto con algunas empresas del Norte) no manifiestan todavía un interés realmente apropiado por los estándares sociales y derechos laborales y la participación democrática de su población. Por ello, en Río nadie gastará palabras para referirse a los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

La fórmula básica de una perspectiva de los derechos humanos podría definirse así: sobrevivir tiene prioridad ante vivir mejor. Los derechos humanos generales gozan de prioridad frente a mejores estándares de vida, tanto en el Norte como en el Sur. En este sentido y en tiempos de una vasta escasez, las políticas ambientales y de recursos también deciden sobre quién recibe qué parte en el espacio ambiental global, que está distribuido en forma dramáticamente desigual en la actualidad. Mientras el consumo de recursos o la contaminación de la atmósfera sigan aproximándose cada vez más a los límites de lo tolerable, la mayor parte de la población marginalizada del planeta recibirá cada vez menos si no se hace una distribución más justa de los recursos y de los efectos del cambio climático. Una política ambiental y de recursos de orientación universalista deberá impulsar la contención del consumo de recursos en los países industrializados para dar preferencia a las necesidades básicas. Cerca de un tercio de la población mundial depende del acceso directo a la naturaleza y vive de ecosistemas, es decir, sabanas, bosques, ríos, lagos, campos de cultivo y zonas costeras, cuyos recursos son codiciados cada vez más por las empresas públicas y privadas. Día a día se pierden espacios naturales y culturales de manera irrecuperable.

Esto cambiará recién cuando la demanda por recursos naturales se haya revertido de forma estructural. Entonces no será rentable, por ejemplo, buscar petróleo o arenas bituminosas en la selva tropical. Recién cuando disminuya la avidez por carne de vacuno no será necesario acaparar más tierras para cultivar follaje y pastos. Dicho brevemente: los patrones de producción y consumo resource-light (más livianos en el uso de los recursos) son la base de una gestión de los recursos en el mundo que respete los derechos humanos.

Todas las estrategias en torno a la economía verde ponen a la economía en el centro de cualquier debate sobre la viabilidad del futuro. Está claro que salvaremos el planeta sólo *con* la economía, no contra ella. Sin embargo, hoy la cuestión crucial que surge de manera más urgente que nunca es: ¿El *homo economicus* nuevamente en el centro de todas las soluciones? Quien busque modelos de sociedad que reconozcan los derechos humanos, la justicia social, diversidad cultural y participación democrática como principios fundamentales, y al mismo tiempo quiera mantenerse dentro de los límites ecológicos, no puede hacer menos que reinventar la modernidad.

CAPÍTULO 4

El perfil de una economía moderada

Por más que se quiera pasar por alto este hecho, una economía ecológica debe encontrar una respuesta a la desmesura que trajo aparejada la economía industrial. La economía fósil ha crecido demasiado en relación con la naturaleza, de modo que está doblegando a la biosfera. Y lo que es válido para la dimensión física, por fuerza afecta también la dimensión social del sistema económico: así pues, de igual manera que se debe encontrar un nuevo equilibrio entre la economía y el mundo natural, se debe encontrar un nuevo equilibrio entre la economía y el mundo social. Es difícil imaginar que se puedan respetar los límites superiores en el flujo de recursos de una economía, si no se establecen límites sociales para la expansión del sistema económico. No se puede prescindir del mundo fósil si, al mismo tiempo, no se modifica el mundo mental. La técnica debe encontrar su correspondencia en la cultura social, y viceversa. En síntesis: sin una economía moderada, no puede haber una economía verde.

En el año de 1992, en la Conferencia de Río, por lo menos se dio la noción de una reforma social que estuviera vinculada con una menor presión sobre la naturaleza. Rigiéndose por el lema de “patrones de consumo y producción sostenibles”, la Agenda 21 exigió en ese entonces que se trabajara para lograr un estilo de economía a nivel mundial que pudiera incluir a todos los países, tanto ricos como pobres, sin que eso ocasionara la ruina de la biosfera. Ahora en la economía verde la atención está dirigida a la introducción de patrones de producción sostenibles que sean tan eficientes como compatibles con la naturaleza; sin embargo, se han dejado de lado los cambios en los patrones de consumo de las clases medias y altas globales. Ya no se menciona hasta qué punto el estilo de vida de las clases pudientes de este mundo, que es muy expansivo y de alto consumo material, obstaculiza la sostenibilidad. Y, si acaso, en la concepción de una economía verde se menciona la inequidad social que existe en el planeta, inmediatamente se piensa en el combate a la pobreza. Dejarles a los pobres los bosques y los peces y los pastos y los campos, y protegerlos de la minería y la extracción del petróleo... hasta ahí, muy bien. ¿Pero es que acaso se puede separar la tarea de aminorar la pobreza de la de aminorar la riqueza?

La economía de suficiencia

La economía verde, tal y como la entendemos, tiene que fomentar, además de todas las innovaciones técnicas, también el arte de la abstinencia. Demasiados bienes, velocidades demasiado altas, distancias demasiado grandes, demasiado estrés en el trabajo y en demasiados ámbitos vitales, como la escuela y la cultura, donde rigen las máximas de la competitividad y la eficiencia. Hoy en día, la economía no conoce

la medida. Por eso, nos parece que el arte de la abstinencia forma parte del modelo de una economía viable en el futuro. Será imposible eludir la pregunta “¿Cuánto es suficiente?” Lo suficiente es el justo medio entre el exceso y la carencia. Apunta por un lado a corregir el exceso, porque éste lastra al individuo o a la sociedad con todo tipo de costos. Y, por otro lado, apunta a corregir la carencia, porque muchos con frecuencia no disponen de lo más necesario para la vida. La clase media global con frecuencia enfrenta problemas ocasionados por el exceso, mientras que la mayoría de la población mundial lucha con problemas provocados por la carencia.

El concepto de la economía verde debe estar forzosamente acompañado por la idea de la suficiencia, igual que la idea del “cada vez más” ha formado parte de la economía fósil. Ya que la economía se ha desentendido en los últimos 200 años de los límites naturales y sociales, ahora debe aplicarse la autocontención en aras tanto de la naturaleza como de la sociedad. Las relaciones económicas han estado determinadas en los últimos 200 años por el imperativo del “cada vez más”; ahora la cuestión es lograr un desarme económico y reinventar una economía con medida. Hablando en términos de política ambiental: “lo suficiente – prosperidad con medida” tiene que acompañar a la “eficiencia – manejo inteligente de los recursos” y a la “consistencia – compatibilidad entre la industria y la naturaleza”, para poder lograr una transformación del sistema económico. “mejor”, “diferente” y “menos” son los tres pilares de la sostenibilidad.

El hecho de que la autocontención puede ser benéfica forma parte de las experiencias cotidianas. Comer demasiado nos resta movilidad y daña la salud; demasiado deporte provoca adicción y distiende los órganos. También es posible excederse con lo bueno. De manera muy similar los beneficios de la economía fósil pueden convertirse en su opuesto. Si hablamos en términos de tiempo, pone a nuestra disposición velocidades enormes que, no obstante, con frecuencia terminan en un congestionamiento vial. En términos de espacio, ha provocado imbricaciones planetarias que, por otro lado, han sido compradas al precio de la ruina de las economías locales. Y, por último, ha dado lugar a una infinita oferta de bienes que, de nueva cuenta, han contribuido al exceso y a una inmensa producción de basura. Que un alto nivel de vida no necesariamente significa una alta calidad de vida, más aún, que un exceso en el estándar de vida puede empeorar la calidad de vida, forma parte de las lecciones que entre tanto han tenido que aprender las sociedades ricas. Frente a este telón de fondo, el objetivo de la perspectiva de la suficiencia es reducir el exceso y la distensión, para que las calidades de vida que han desmerecido recuperen su valor. De esta manera, se abre la posibilidad de un doble dividendo: un menor rendimiento económico no sólo beneficia a los recursos, sino que también crea el espacio para una vida mejor.

Velocidades más lentas. Si se toma en cuenta que las altas velocidades cuestan recursos de una manera desproporcionada, resulta lógico introducir la autocontención como un principio técnico del diseño. Así pues, los automóviles, los trenes y, de otra forma, también los aviones, pueden incluir principios de construcción que permitan alcanzar sólo velocidades medias. A una flotilla de automóviles con motores menos potentes, por ejemplo, en la que ningún auto llegue a velocidades mayores de, por decir, 120 km/h, le bastan cantidades considerablemente menores de combustible, además de permitir otro tipo de soluciones por lo que respecta a los materiales, el peso, los equipos de seguridad y el diseño de la forma; es decir, que se trataría de una

nueva generación de técnica automotriz. De manera similar, los trenes se podrían limitar en su diseño de construcción a una velocidad aproximada de 250 km/h, un umbral más allá del cual los costos energéticos aumentan desproporcionadamente. Es en el diseño de autotransportes con sistemas menos potentes de propulsión la utopía del siglo XXI tendría su manifestación técnica: vivir con elegancia dentro de los límites naturales.

Mayor regionalización. La velocidad lleva a distancias más grandes. Por eso, con la aceleración propulsada por combustibles fósiles, se han tendido vastas redes de alcance nacional, continental y aun global. Primero el ferrocarril y los camiones, después los aviones y los barcos cargueros y, finalmente, el internet han deshecho los nexos locales de la economía y de la vida, a la vez que han vinculado centros tanto suprarregionales como supranacionales, casi siempre en lugares muy distantes. Las uvas vienen de Chile, las computadoras de Taiwán, e incluso la *granola* orgánica ha recorrido, gracias a sus ingredientes, cientos sino es que miles de kilómetros. Al efecto, las regiones y las comunidades locales se convierten en gran parte en plataformas en las que se desarrollan estrategias supralocales de ventas y producción. Pero el bienestar ecológico dependerá de un nuevo balance entre la distancia y la cercanía. Resulta evidente que serán necesarios sistemas de abasto con un uso menos intensivo de medios de transporte, si es que nos queremos preparar para el fin de la era del petróleo barato. Además, se requiere de un actuar verde de la economía que se inserte en los ciclos naturales y que obtenga y procese las materias primas energéticas, materiales para construcción, textiles y alimentos en los ecosistemas locales. De esta manera volverá a crecer hasta un cierto grado la base material para una economía cuyo centro se encuentra a nivel regional. Después del triunfo de la globalización, se debe contar con un renacimiento de las regiones.

Consumo reflexionado. Este renacimiento es una buena noticia para una sociedad que quiere que la totalidad de los bienes comercializados retorne a derroteros que no sean dañinos. Porque es totalmente legítima la pregunta de si resulta razonable una forma de economía que, en tiempos de una gran escasez de recursos naturales, utiliza valiosos recursos para satisfacer cada vez más necesidades a través de productos de mercado, además de que ofrece cientos de variantes de cada uno de esos productos de mercado, para hacer que todas esas variantes se vuelvan obsoletas en ciclos relativamente cortos, para a su vez sustituirlas por flamantes productos. No obstante —¿es de verdad necesario enfatizarlo?— una estrategia de suficiencia cuantitativa se opone a los impulsos de un capitalismo programado para eliminar al competidor: sólo si el capitalismo logra crear valor agregado sobre la base de un número más reducido de bienes, se puede contar con que tenga posibilidades de sobrevivir en el futuro. Además se ha mostrado que con su producción infinita de deseos, la sociedad de consumo ha abandonado su objetivo verdadero de mejorar la vida de las personas. Pues la sobreabundancia y los ciclos de consumo tienden a embotar la capacidad de orientación y decisión. Todos haremos bien en aprender una habilidad totalmente nueva: prescindir, seleccionar, decir que no. “De nada demasiado”: seguramente pocas veces en los últimos dos milenios y medio este antiquísimo dicho de Delfos ha sido tan acertado como ahora, en la sociedad del hiperconsumo.

Los social *commons* como factor económico

Atrás han quedado en los viejos países industrializados las épocas de gran crecimiento económico. Las y los expertos se siguen peleando acerca de si se deberá esperar un crecimiento económico que cada año sea menor o, más bien, un crecimiento cero interrumpido por auges y depresiones. Pero aún no están considerando en el cálculo la transformación ecológica de la economía y la sociedad. Una estrategia de ecoeficiencia (“mejor”), de compatibilidad con la naturaleza (“diferente”) y de autocontención (“menos”) tiene todavía menos perspectivas de crecimiento. En una sociedad postcrecimiento, los sectores económicos renovables tienen que crecer, pero los sectores fósiles menguan, y visto en balance, a largo plazo se debe contar con “tasas de crecimiento negativas”.

¿Cómo funcionará una economía que no crece, si todos van a disponer de un ingreso menor al que tenían antes? Hablando esquemáticamente, esta importante pregunta, que va a determinar las próximas décadas, tiene dos respuestas: una reaccionaria y una progresiva. La respuesta reaccionaria consiste en aguantar el período de mengua económica a través de una mayor inequidad, exclusión social y depauperación; y la progresiva, en que hay que invertir en un nuevo modelo de bienestar que les asegure a todos una vida con lo suficiente, y que descansa en un equilibrio diferente entre economía y sociedad. La respuesta progresiva no va a caer del cielo, sino que requiere de preparación en los años y décadas venideros. Para fortalecer a la sociedad frente a la economía, se necesitan nuevas estructuras para mentalidades modificadas.

Los bienes comunes son, a pesar de lo anticuado del término, un rasgo esencial de la realidad actual. Los seres humanos sólo pueden sobrevivir y florecer si tienen acceso a la naturaleza, acceso a la familia y los amigos, y acceso a la lengua y la cultura. Por muy obvias que puedan parecer estas circunstancias, resulta muy difícil encontrar para ellas un lenguaje político y público. Si hablamos de economía, los conceptos de mercado y Estado desempeñan el papel dominante. Si hablamos de política, entonces pensamos en los polos opuestos de derecha e izquierda. De los bienes comunes (*commons*, en inglés) no habla prácticamente nadie, como si además del mercado y el Estado no hubiera nada relevante. Los conceptos de mercado y Estado parecieran ser dos tubos comunicantes: mucho mercado por un lado, y poco Estado por otro; poco mercado por un lado, y mucho Estado por otro. Al efecto hace mucho que los historiadores y antropólogos insisten en que el intercambio de mercancías a través del mercado y el Estado sólo representa dos formas de distribución de bienes, y que hay una tercera: el intercambio en la comunidad. Mientras que en la primera forma domina el principio de la competencia, en la segunda el principio de la planeación ocupa el primer plano, y, en la tercera, el principio de la reciprocidad. Por lo general estos principios de distribución se mezclan en una sociedad, pero en los dos últimos siglos ha ocurrido algo nuevo: el principio de la reciprocidad fue perdiendo cada vez más terreno. Así pues, desde Adam Smith, la lucha se ha dirimido entre la relación entre el mercado y el Estado, entre la competencia y la planeación, en tanto que el principio de la reciprocidad se convirtió en el gran perdedor. Colectivos como la familia, la parentela, el barrio, las redes de amigos, las cooperativas, y formas de economía solidaria han sido arrastrados por el remolino de la derrota, en tanto que, a veces el mercado, a veces el Estado, han sido los ganadores.

En una sociedad postcrecimiento se trata de revocar este desarrollo. O, mejor dicho, de impulsarlo hacia delante. Los *commons* son otra fuente de prosperidad, junto con el mercado y el Estado. Así, los commons constituyen la base de los colectivos sociales sobre todo en cuatro planos:

- *Primero*, en el plano de la naturaleza todos los seres humanos dependen del agua, los bosques, los suelos, la pesca, la diversidad de las especies, el paisaje, el aire, la atmósfera y todos los procesos vitales que en ella ocurren. Como seres biológicos tienen un derecho a los bienes naturales, de manera independiente y con prioridad a cualquier propiedad privada de las existencias naturales.
- *Segundo*, en el plano de lo social los lugares como plazas, parques, patios interiores, jardines públicos, así como el fin de la jornada laboral, las vacaciones y el tiempo libre constituyen una condición indispensable para que se conformen redes sociales.
- Por lo que se refiere al plano de la cultura, *tercero*, resulta evidente que la lengua, los recuerdos, las costumbres y el conocimiento forman parte del equipamiento básico para lograr cualquier creación material o inmaterial. En su calidad de seres culturales, los seres humanos se apoyan, en última instancia, en los logros de otros para estimular su intelecto y sus destrezas.
- Y por último, *cuarto*, en el plano de lo digital: la producción y el intercambio en internet funcionan tanto mejor en la medida en que menos se impida el acceso a los bancos de datos. Por eso resulta importante para la libre navegación en el mundo virtual que los códigos de software y la riqueza de los textos, sonidos e imágenes que han sido subidos a la red no sean restringidos mediante exageradas demandas de propiedad intelectual.

Reforzar los bienes comunes requiere de otra mirada sobre la economía. ¿Qué es, en realidad, la propiedad? ¿Y qué es la legitimación de los dueños de la propiedad? Lo que parecería ser una discusión filosófica tiene consecuencias prácticas. Si en el concepto de propiedad no se hace una separación rigurosa entre la propiedad y la utilización, ni el pastor que a veces deja que sus ovejas pasten acá y mañana acullá, ni quien navega por internet bajando artículos y fotos, tienen apenas una oportunidad. ¿Y qué es, en realidad, la competencia? Si la competencia se entiende como “tratar de lograr algo juntos”, que era el significado original de la palabra, y no “la sobrevivencia del más fuerte”, entonces las y los pequeños comerciantes y las y los especialistas en software pueden respirar aliviados. ¿Y qué es, en realidad, la creación de valor agregado? Si con eso se hace referencia únicamente al valor del dinero que se puede alcanzar por medio de la venta de mercancías y de servicios, entonces el trabajo familiar, los servicios entre vecinos, las oficinas en los barrios y los *peer groups* quedan excluidos. ¿Y qué es—y esta es la pregunta por excelencia—, en realidad, el dinero? Si respecto al dinero no se distingue si se trata de un medio para el intercambio y el crédito o un medio para el enriquecimiento y la especulación, entonces toda la economía tiene un desequilibrio fatal, lo cual puede significar una catástrofe inminente.

Así, con una mirada diferente sobre la economía aparecen rasgos esenciales que podrían ser relevantes para una economía sin crecimiento. Pues además de la economía formal existe una economía relacional, en la que no sólo importan las cosas materiales, sino también las relaciones entre las personas. El espectro de la econo-

mía relacional puede abarcar desde asociaciones tradicionales, como asociaciones deportivas y los feligreses de una iglesia, pasando por los negocios de naturaleza más bien clásica, como las tiendas que ofrecen mercancías o los locales que hacen reparaciones, hasta llegar a las formas postmodernas como el *car-sharing* y las instalaciones solares comunitarias. De esta forma pueden surgir diferentes formas de compromiso: amistades, grupos de autoayuda y servicios entre vecinos, así como también organizaciones de beneficencia, empresas locales y servicios de internet. Las formas de la economía relacional se encuentran en ámbitos diversos: en la alimentación, en la atención a enfermos y ancianos, en los servicios, en las necesidades cotidianas y en los sectores deportivo y del entretenimiento.

En el fondo se trata de una economía que apuesta a los vínculos sociales, de una *care economy*. Se ocupa del cuidado de los niños, los jóvenes, los enfermos y los ancianos. En ella se organizan los padres, las y los educadores, las y los cuidadores y quienes dan asesoría. Desde luego que también se muestran las dificultades a las que se debe enfrentar una economía relacional: el cuidado de personas, las relaciones familiares, las comunas, los entes privados deben reorganizarse financieramente y estructuralmente. Una nueva organización de este tipo también deberá reordenar las relaciones entre los sexos si es que no se quiere perpetuar la división del trabajo jerárquica y rebasada entre los sexos. La *care economy* se descarrilará, y junto con ella la totalidad del concepto de economía relacional, si los hombres y las mujeres no participan en la misma medida. El cuidado de personas debe gozar de una revaloración tanto política como social. El trabajo remunerado y no remunerado deberá ser redistribuido de nuevo, no solamente, pero sobre todo entre los sexos.

Además, la economía relacional apela a motivos y normas diferentes de las del mercado y el Estado. Claro que la competencia y el rendimiento, la rutina y la lealtad también son factores presentes, incluso pueden ser una parte esencial de los *social commons*, pero nunca podrán sustituir al trabajo voluntario y la autoorganización, a la cooperación y el espíritu emprendedor. Ya sea en la elaboración de Wikipedia o en jardines comunitarios urbanos, sea en la administración de clubes para personas de la tercera edad o de escuelas: la virtud de la cooperación siempre se escribe con mayúscula. La colaboración, con todas sus dificultades, es más conveniente que la competencia, la curiosidad compartida es más valorada que el egoísmo. Las cosas que se hacen con pasión, compromiso y responsabilidad salen mejor; esta ya vieja experiencia primero tuvo que ser aprendida dificultosamente por la administración de empresas.

¿Cómo puede funcionar una economía sin crecimiento? No habrá una respuesta a esta importante pregunta si antes no se analizan las hasta ahora ocultas dimensiones del bienestar –sobre todo también la de la *care economy*–. Una de esas dimensiones son los *social commons*. Es cierto que la riqueza personal ha sido el aspecto más tomado en cuenta de la prosperidad, pero son igualmente importantes todas las variantes de la riqueza comunitaria. Aquí radica, además, la oportunidad de construir en el futuro formas de *distributed economies*, siguiendo el ejemplo de la *distributed energy production*, es decir, formas de producción local, que están vinculadas a través del internet, si es necesario, a nivel mundial. Pero sobre todo se ha vuelto posible lograr una prosperidad con menos dinero. Porque en los *social commons* no se producen de manera primaria rendimientos a partir de motivos monetarios, sino de un espíritu comunitario, del interés por el asunto o de la solidaridad, las necesidades

pueden ser satisfechas con un menor empleo del dinero. Así como Wikipedia sería incosteable si todos los autores y correctores tuvieran que recibir honorarios, así, por ejemplo, en un proyecto de residencia compartida las personas mayores que viven ahí pueden brindarse servicios y cuidados que nunca podría pagar un financiamiento público. Por eso, la reinención de los *commons* es la condición indispensable para la construcción de un orden económico en el siglo XXI donde la perspectiva del crecimiento es otra.

El bienestar en la diversidad

El dinero y la felicidad han tenido desde siempre una relación precaria. ¿El dinero hace la felicidad? ¿Quién tiene más probabilidades de ser feliz, un rico o un pobre? Generaciones enteras de eruditos han reflexionado acerca de cómo conciliar los objetivos de la economía con los demás objetivos de una sociedad. Pero desde que el capitalismo financiero global se apoderó de la economía, la vieja relación del dinero y la felicidad se fue completamente al traste: la renta nacional se ha desprendido de la evolución del bienestar, aún más: una renta nacional alta puede tener repercusiones destructivas para el bienestar. Y ni siquiera hay que pensar en la naturaleza, basta con ver lo que la consecución del crecimiento económico a toda costa ha hecho con las comunidades y las sociedades. Aproximadamente 230 años después de Adam Smith, quien con su obra capital *Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* inaugurara la era de la economía, el interés principal de toda acción económica –el bienestar de las naciones– se ha transformado hasta el punto de ser prácticamente irreconocible. Y, sin embargo: no es la multiplicación de las ganancias o del poder el verdadero objetivo de la actividad económica, sino –y esto es difícil de creer– fomentar el bienestar del ser humano y de la naturaleza. ¿Pero qué es *verdad-era riqueza*?

La cuestión del bienestar está de regreso en la orden del día, tanto en el Sur como en el Norte. Si no se puede equiparar el bienestar con el crecimiento, ¿entonces con qué? ¿Con diferentes modelos de bienestar? ¿Cuáles son los objetivos del bienestar, cuáles los medios para hacerlo realidad? Esta es la pregunta que impulsa a numerosos movimientos sociales, que influye el debate público y que se refleja tanto en las oficinas nacionales de estadística como en una que otra comisión parlamentaria. Esta pregunta alude a la discusión por la economía verde en Europa, así como a la “civilización ecológica” en China, y alimenta el debate por la “economía de suficiencia” en Tailandia, por la economía “islámica” y por el “Buen Vivir” en los países andinos. Casi nada de esto ha quedado plasmado en los reportes del PNUMA acerca de la economía verde, ya no digamos en los documentos que se elaboraron en torno a Río+20.

Plantearse la pregunta por el bienestar significa liberar un poquito más a la sociedad de la economía. Más aún: hacer retroceder a la economía hasta que la sociedad de mercado se convierta en una economía de mercado. Karl Polanyi, autor de esta fórmula, quiso decir con ello que se debería crear de nuevo el equilibrio entre la economía y la sociedad. Una sociedad, según Polanyi, *tiene* una economía, pero no *es* una economía. La línea divisoria entre economía y sociedad siempre fue controvertida y ha tenido una muy alta codificación cultural. Las diferentes culturas se distinguen en cuanto a su forma de entender la naturaleza, el trabajo, la familia, las

relaciones entre los sexos o la espiritualidad. Pero algo tienen en común: evalúan las relaciones sociales por el parámetro “bueno o malo” y no (sólo) por el parámetro “eficiente o improductivo”. La primera distinción representa un juicio moral, determinado por el “gran relato” de cada cultura, de su percepción del tiempo y el espacio. La segunda distinción es un juicio basado en criterios económicos, que evalúa las circunstancias según su rendimiento, productividad y competitividad. También aquí hay un gran relato, a saber, cómo se pueden obtener la riqueza material y el poder económico. El pensamiento economicista coloniza los otros ámbitos de la vida, como la educación, la familia, la salud, la cultura, el tiempo libre, etc., cuyos normas y valores no tienen mucho que ver, en realidad, con la eficiencia y la competitividad económicas. Cada uno de estos ámbitos vitales tiene distintos conceptos rectores, formas de pensar y prácticas, que varían dependiendo de la profesión y la cultura. A pesar de que las mentalidades de los ámbitos vitales cambian continuamente, éstas están culturalmente determinadas y guían los impulsos y las acciones. Romper la pretensión monopólica del discurso economicista en asuntos públicos: esta agenda vincula a miles y miles de movimientos de oposición en el mundo entero.

Existen en el Norte numerosas iniciativas que tratan de acotar el dominio de la visión economicista del mundo. Estas iniciativas están en contra de la tendencia de funcionalizar el trabajo, la educación, la planificación urbana, el arte y las relaciones sociales, es decir, la vida, en el nombre de una eficiencia todavía más economicista. Al efecto se basan no en cálculos costo-beneficio, sino en el parámetro de una vida buena y justa. No es casualidad que en el Norte se haya vuelto a encender la discusión acerca del concepto de bienestar. Amplios círculos son de la opinión que el concepto rector de la economía, el producto social bruto, provoca confusión y que debería ser sustituido por otras medidas del bienestar. Por ejemplo, no se puede hablar de bienestar social cuando la desigualdad aumenta continuamente y cuando la riqueza de unos pocos es comprada al precio de la pobreza de muchos. Tampoco, cuando la producción de productos agrícolas, y de bienes y servicios se acompaña de daños tanto a los ecosistemas locales como a la biosfera global, como también lo subraya el reporte del PNUMA sobre la economía verde.

Otro escenario para restringir el poder de la economía es el orden de los mercados financieros. ¿Cómo se puede revertir el desacoplamiento actual de la economía financiera de la economía real? Volver a ponerle límites estrictos a la economía financiera y darle al dinero un papel adecuado: esta siempre es la prueba de fuego de una política que no sólo administra, sino que también organiza. Otro término que ha sido vehementemente discutido durante toda la historia de la industrialización es el del trabajo. De las discusiones acerca de la duración de la jornada laboral hasta la precarización de los puestos de trabajo, de los conflictos en torno al trabajo en cadena hasta los salarios de los altos ejecutivos, es muy amplia la paleta de los temas en conflicto que giran en torno a la pregunta: ¿hasta qué punto la economía puede apropiarse de la vida de un empleado? Sobre todo se ha perdido de vista la madre de todas las preguntas: ¿qué es un buen trabajo? Ciertamente un buen trabajo es una actividad satisfactoria, que implique un desafío, pero ¿puede decirse eso de un trabajo que daña a los seres humanos o a la naturaleza? Ya no está lejos el momento en el que la discusión gire alrededor de un buen trabajo para todos sin crecimiento económico. ¿Existe al respecto una teoría en las ciencias de la economía, por no hablar de la práctica? Además otro conflicto recorre los límites de la economización, por ejemplo, los

ámbitos de la salud, lo social y la educación. La misma lengua se traiciona: las y los pacientes se convierten en usuarios, las y los necesitados de cuidado y atención se convierten en receptores de servicios, las y los estudiantes se convierten en clientes. Numerosos grupos quieren oponer a esto los motivos del cuidado, del compromiso, de la autonomía. ¿Qué es salud, que son cuidados, qué es la educación? Tales preguntas, que se formulan de nuevo todos los días, son la materia de la cual están hechos discursos no economicistas. Para mencionar un ejemplo tomado de la planificación urbana: ¿qué es una buena ciudad?, ¿para quién y con qué fines? La construcción de túneles y de autopistas, los centros despoblados y los suburbios que se desbordan son todos temas que deciden si una planificación urbana es una mera planificación económica o la configuración de un entorno digno para todas y todos los ciudadanos. ¿Cómo se logra la transformación de una ciudad, con qué criterios de belleza y funcionalidad? Estas son cuestiones que son debatidas vehementemente en todo el orbe. Las ciudades son organismos vivos: si sólo obedecieran a criterios economicistas, serían inhóspitas y carecerían de calidad urbana. Las buenas ciudades son diversas, no unificadas y, sobre todo, dinámicas, igual que la búsqueda de una vida buena y justa.

También en el Sur existe, cobijada bajo una cultura diferente, la idea de la buena vida; sólo que aquí se le considera en oposición al desarrollo económico convencional. Pues la población campesina que habita en la periferia casi siempre ha sufrido a causa del desarrollo; ellos cargan con los costos inherentes del crecimiento económico. Mientras que los gobiernos y la economía, las clases medias urbanas y las élites rurales impulsan el desarrollo, el campo, el espacio vital y las tradiciones culturales de la población indígena, de los pequeños campesinos y los pescadores son puestos bajo presión. Las presas expulsan de sus territorios a los pueblos nativos, la agroindustria restringe el acceso al mercado para los campesinos, fábricas flotantes para el procesamiento de pescado marginan a los pescadores locales, los supermercados afectan a los pequeños comerciantes. El crecimiento económico con frecuencia muestra rasgos de canibalismo: devora tanto a la naturaleza como a los seres humanos, y arroja desechos y efluvios de todo tipo. El lado luminoso del desarrollo convive con el lado oscuro del desalojo y el despojo. Este es el motivo por el cual el crecimiento económico produce de manera regular también pobreza, junto con la riqueza.

Por esta razón el movimiento del Buen Vivir se puede caracterizar como un objetivo comunitario. Nacido entre los indígenas de los altiplanos de los Andes, este movimiento ha acogido a clases sociales urbanas y a muchos países. En 2008 el Buen Vivir fue incluido en la nueva Constitución de Ecuador, y en 2009 en la de Bolivia (con el nombre de Vivir Bien). Los significados del Buen Vivir se diferencian entre sí, pero es posible distinguir cinco elementos.

En primer lugar, la buena vida se entiende como el polo opuesto al desarrollo lineal e impuesto desde arriba. Al efecto, el desarrollo no se considera únicamente como un proceso socioeconómico, sino también mental. Lo que se pretende lograr es nada menos que la descolonización de la imaginación.

En segundo lugar, existen diferentes discursos del Buen Vivir, dependiendo de la tradición cultural. Vaya, existen diferentes naciones –la Constitución boliviana habla de plurinaciones–, cada una con su propia lengua, historia, formas sociales y adaptaciones a las condiciones naturales. La diversidad biológica condiciona la diversidad cultural, y viceversa.

En tercer lugar, es un relato vinculado con la comunidad el que enfatiza las relaciones con los camaradas, con el mundo animal y vegetal y con el cosmos, en lugar de partir del individuo, como lo hace la tradición occidental. Buen Vivir significa poder convivir bien con el mundo que nos rodea, tanto el natural como el humano.

En cuarto lugar, los bosques, los suelos o las semillas son explotados de manera conjunta, también el trabajo colectivo y las máquinas son bienes comunes. Si bien es completamente admisible que las reglas sociales y las técnicas cambien, esto sucede de común acuerdo.

Por último y *en quinto lugar*, la naturaleza es el fundamento de la existencia de los seres humanos, que forman parte de la comunidad de todos los seres vivos. Montañas y ríos, plantas y animales están incluidos en el relato conjunto, en su calidad de sujetos vivos con los que se puede dialogar.

No obstante, el movimiento del Buen Vivir entra cada vez con mayor frecuencia en conflicto con los gobiernos, aunque éstos le sean ideológicamente cercanos. En contra de lo que se esperaba y de los encomiables principios, la vieja constelación no se ha modificado: la población indígena y su espacio vital siguen pagando las consecuencias del desarrollo de las ciudades y del poderío económico de la nación. Los conflictos por la minería y yacimientos de petróleo, las luchas por la construcción de carretera y la deforestación están a la orden del día. El desarrollo entendido como crecimiento sigue siendo la estrategia dominante. Sobre todas las cosas, los espacios vitales en las montañas y selvas de los indígenas se usan sobre todo para la extracción de materias primas como oro, mineral de hierro, petróleo y litio; al efecto hay que decir que tampoco los gobiernos afines al Buen Vivir pueden descuidar los agujeros en el presupuesto del Estado y las oportunidades de acumulación de la economía (mundial).

En la zona de Asia, especialmente en Bután, Tailandia y los países vecinos, existen corrientes comparables contra el pensamiento convencional acerca del desarrollo. Dondequiera que la tradición budista todavía se conserva, crece el interés por los discursos sobre la nueva economía. Los activistas y organizadores comunitarios (*community organizers*) se proponen crear una “economía de suficiencia”; en Tailandia, un término que goza de la aprobación del rey, y que en el período que siguió al gobierno de Thaksin Shinawatra (primer ministro 2001-2006) incluso encontró cabida en el lenguaje gubernamental. El concepto de la economía de suficiencia tiene sus raíces en el concepto budista del ser humano, que recomienda buscar el justo medio entre la carencia y el lujo, así como entre la tradición y la modernidad. El actuar económico debe seguir criterios razonables y considerar las consecuencias a largo plazo para el medio ambiente y la comunidad. Como estructura económica, se le da un gran valor a la resiliencia, es decir, a la resistencia contra cambios drásticos y catástrofes.

Como también el Buen Vivir, la economía de la suficiencia se nutre de fuertes reservas contra la economía dominante, debido a su énfasis en la ganancia y su indiferencia frente a la naturaleza y al ser humano. Tanto en el hemisferio Norte como en el Sur, la economía verde puede aprender algunas lecciones de la crítica a las certezas económicas en su búsqueda de una “economía de permanencia”, para utilizar un concepto de J. C. Kumarappa.

BIBLIOGRAFÍA

- Altvater, Elmar (2012), “Zerstobene Verheißung: Finanz- und Naturkrisen 20 Jahre nach Rio”, en *Informationsbrief Weltwirtschaft und Entwicklung*, W&E-Hintergrund, febrero de 2012.
- Brunnengräber, Achim/Ilaas, Tobias (2012), “Rio+20: Die grüne Beliebigkeit”, en *Blätter für deutsche und Internationale Politik*, 2/2012, pp. 15-18.
- Dröge, Susanne/Simon, Nils (2011), “Green Economy: Vision mit begrenzter Reichweite”, *SWP-Aktuell* 19, Berlín.
- Fatheuer, Thomas (2011), *Buen Vivir – Recht auf ein gutes Leben*, Colección Escritos sobre Ecología de la Fundación Heinrich Böll, vol. 17, Berlín.
- Fundación Heinrich Böll, (2002), *Das Jo’Burg-Memo. Memorandum zum Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung*, Berlín.
- Fundación Heinrich Böll y ETC Group (2012), *Interactive Dialogue on Harmony with Nature. Who will control the Green Economy* (de próxima publicación).
- Fundación Heinrich Böll y WWF Alemania (2011), *How to Feed the World’s Growing Billions. Understanding FAP World Food Projections and their Implications*, abril de 2011, <http://www.boell.de/downloads/2011-05-How-too-feed-the-Worlds-growing-billions.pdf>.
- Gudynas, Eduardo (2011a), “Buen Vivir. Today’s tomorrow”, *Development*, 54 (4), pp. 441-447.
- Gudynas, Eduardo (2011b), “Neo-Extraktivismus und Ausgleichmechanismen der progressiven südamerikanischen Regierungen”, en *Kurswechsel* 3/2011, pp. 69-80.
- Helfrich, Silke/Kuhlen, Rainer/Sachs, Wolfgang/Siefkes, Christian (2010), *Gemeingüter – Wohlstand durch Teilen*, ed. por la Fundación Heinrich Böll, Berlín.
- Helfrich, Silke/ Fundación Heinrich Böll (comps.) (2012), *Commons. Für eine Politik jenseits von Markt und Staat*, Bielefeld.
- Jackson, Tim (2011), *Wohlstand ohne Wachstum – Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt*, ed. por la Fundación Heinrich Böll, Múnich.
- Madlener, Reinhard/Alcott, Blake (2011), *Herausforderungen für eine technisch-ökonomische Entkoppelung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum. Unter besonderer Berücksichtigung der Systematisierung von Rebound-Effekten und*

Problemverschiebungen, Comisión investigadora “Crecimiento, Prosperidad, Calidad de Vida” del Parlamento Federal alemán, versión final del 7 de diciembre de 2011.

Martens, Jens (2012), *Rio+20. Die UN-Konferenz für Nachhaltige Entwicklung 2012. Hintergründe – Konflikte – Perspective*, ed. por el Global Policy Forum Europa, Bonn.

Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (2010), *Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030. Unser Weg zu einer bio-basierten Wirtschaft*, Bonn y Berlín, www.bmbf.de/pub/biooekonomie.pdf, 2 de mayo de 2012.

McKinsey Global Institute (2011), *McKinsey Sustainability & Resource Productivity Practice, Resource Revolutions: Meeting the World's Energy, Materials, Food and Water Needs*, noviembre de 2011.

Mittler, Daniel (2011), “Vorwärts zur Green Economy?”, en *Rundbrief Forum & Entwicklung*, 3/2011, pp. 8-9.

OCDE (2011a), *Auf dem Weg zu umweltverträglichem Wachstum. Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger*, mayo de 2011.

OCDE (2011b), *Towards Green Growth*, mayo de 2011, OCDE.

Sachs, Wolfgang (2002a), “Von Rio nach Johannesburg – mit einem Umweg über New York”, 11 de septiembre de 2011, *Wuppertal Paper*, núm. 119, marzo de 2002, Wuppertal.



La Fundación Política Verde

Heinrich Böll Stiftung
México, Centroamérica y el Caribe

Calle José Alvarado 12, Colonia Roma Norte, CP 06760, México D.F.
T (+52) 55 5264 1514 E mx-info@mx.boell.org

